
La formación y consecuencias del capital social en España *

Mariano Torcal y José Ramón Montero

El concepto de capital social ha sido objeto de un intenso debate en los últimos años desde enfoques contrapuestos. Ese debate se ha centrado fundamentalmente en el propio concepto, el proceso de su formación y el alcance de sus consecuencias. A través de un análisis longitudinal del caso español, este artículo trata de mostrar la importancia de la dimensión cultural del concepto tanto para explicar su formación como para estimar sus consecuencias. Esta dimensión cultural no proviene de ningún atributo natural de los españoles, sino que es el resultado de las experiencias políticas vividas por diversas generaciones.

Palabras clave: capital social, confianza social, participación, generaciones políticas, democracia.

El del capital social ha sido uno de los temas más discutidos en la ciencia política durante los últimos años, y ha generado un considerable volumen de literatura. Entre los aspectos más debatidos figuran los elementos integrantes de su concepto, los procesos de su formación y las implicaciones de sus consecuencias. En este artículo pretendemos

* Una versión anterior y más reducida de este artículo apareció en *Social capital and european democracy*, creditado por Jan W. van Deth, Marco Maraffi, Kenneth Newton y Paul F. Whiteley, y publicado por Routledge en 1999. Queremos agradecer a Carles Boix, Robert Fishman, Jacint Jordana, Paul Whiteley y dos evaluadores anónimos de esta *Revista* sus valiosos comentarios, al Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March, la utilización de sus excelentes recursos, y a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (SEC95-1007) su generosa ayuda financiera. Mariano Torcal agradece también al Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame su apoyo financiero y la extraordinaria ayuda que le fueron proporcionadas durante su estancia como *Fellow*.

clarificar algunos aspectos esenciales de estos debates con el análisis del capital social en el caso español.

Incorporado desde la sociología¹, el concepto de capital social se ha integrado en la ciencia política gracias a los trabajos de Coleman (1990) y Putnam (1993). Para el primero, el capital social consiste en «aquellos aspectos de la estructura social que facilitan ciertas acciones de los actores —bien de personas o de actores colectivos—» (Coleman, 1988: 98; 1990: 302). Se trata de una definición estructural y funcional: la primera porque el capital social radica en un aspecto de la estructura social, y no en un atributo de los individuos; la segunda, porque el capital social es caracterizado por facilitar una relación social que a su vez proporciona un mecanismo de acción colectiva (véase también Kolankiewicz, 1996). Para Putnam (1993: 167; 1995: 664-665), en cambio, el capital social consiste en el conjunto de «características de la organización social, como la confianza (*trust*), las normas y las redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad al facilitar las acciones coordinadas». Pese a coincidir en su dimensión funcional con la anterior, esta definición considera al capital social ante todo como un fenómeno subjetivo compuesto de una serie de valores y actitudes (Fukuyama, 1995; Foley y Edwards, 1997; Inglehart, 1997; Newton, 1999a y 1999b). Mientras que para Coleman el capital social integra simultáneamente a la confianza social y a las redes sociales, para Putnam consiste en el conjunto de normas no escritas que representan su activo «no visible». Es decir, en una combinación de normas sociales subjetivas (confianza), características sociales objetivas (redes sociales) y resultados (eficacia y efectividad) (Putnam, 1993: 169; Newton, 1999a: 3).

En este artículo defenderemos una concepción culturalista del capital social, y cuestionaremos el predominio del concepto relacional de confianza social que es característico de los enfoques racionalistas. Para nosotros, la confianza social es un fenómeno cultural colectivo presente entre las sociedades y que se manifiesta individualmente en un conjunto de actitudes. Pero nos alejaremos de la posición culturalista dominante al conferir a la *política*, como se verá, un papel esencial en la formación del capital social. Es cierto que la conceptualización del capital social como una variable actitudinal se aleja del propósito original de Coleman, ya que, entre otras cosas, su trabajo se enmarca claramente en los enfoques de la elección racional (Jackman y Miller, 1998: 50). Para sus seguidores, la interpretación culturalista resulta rechazable, ya que a su reduccionismo actitudinal se une un cierto determinismo marcado por el predominio de una explicación exógena para dar cuenta de su formación y evolución². Según defienden, el capital social es producto de una *inversión*: los individuos invierten en sus relaciones

1. Un concepto similar, en Bourdieu (1985); véase Portes (1998).

2. Pueden verse, por ejemplo, los trabajos de Kolankiewicz (1996), Diani (1997), Hofferth, Boisjoly y Ducan (1999), Jackman y Miller (1998) y Herreros (2000).

sociales, creando de esta manera un *stock* de capital social que luego puede emplearse, y esa inversión se materializa en una serie de recursos que se derivan de relaciones sociales. El ejemplo que en mayor medida suele utilizarse es el siguiente: «si *A* hace algo por *B* y confía en que *B* actúe en el futuro con reciprocidad, se establece una expectativa en *A* y una obligación por parte de *B* de mantener la confianza. Esta obligación puede ser entendida como un crédito en manos de *A* que ha de ser pagado por medio de alguna acción de *B*» (Coleman, 1990: 306).

Creemos, sin embargo, que la relación interactiva axiomática incluida en esta definición de capital social presenta una seria dificultad a la hora de explicar su formación. La creación de capital social plantea un problema del dilema del prisionero: la estrategia dominante de ambos individuos es la no cooperación, y la solución claramente subóptima (Whiteley, 1997: 127, y 1999: 27), lo que puede caracterizarse como un juego de dilema del prisionero con equilibrio estable no-cooperativo (Olson, 1965; Hardin, 1971). Por ello, muchos autores acuden a justificar la creación de capital social con estrategias de *tit-for-tat*: «cooperar en la primera ronda del juego y en las restantes realizar el mismo movimiento del otro jugador de la ronda anterior» (Axelrod, 1986: 41). En este sentido, y desde la perspectiva de la elección racional, la confianza social es una *acción* relacional que sólo puede producirse por un cálculo racional no siempre completamente previsto y de naturaleza *tit-for-tat*, en el que una buena jugada es replicada con otra de igual valor (Coleman, 1988: 102; Levi, 1996a: 3). Al margen de que los juegos formulados con este tipo de estrategias carecen de solución a no ser que se acuda a un conjunto de supuestos de aplicación limitada en el mundo real (Herrerros, 2000: 9; Whiteley, 1999: 28), este razonamiento presupone que la confianza social posee una relación axiomática con los restantes elementos del capital social. De esa forma, en una sociedad dada la confianza social aumentará por la creación de una red de organizaciones sociales y políticas de naturaleza *tit-for-tat* (aunque, de hecho, no todas las asociaciones son de esta naturaleza y, por lo tanto, no todas crean capital social).

Pero no parece que sea enteramente así. Como argumenta Newton (1999a: 4), el planteamiento anterior supone afirmar que la confianza social es fundamentalmente una especie de acto de fe basado en un conocimiento imperfecto. Pero podrían señalarse dos razones al menos que desmentirían esa afirmación. La primera es que la participación en las asociaciones y organizaciones de las sociedades occidentales contemporáneas apenas se basan en relaciones personales. La segunda es que, como consecuencia, la confianza social no se crea por mecanismos existentes en las redes de interacción individual, sino que se trata mayoritariamente de un fenómeno cultural colectivo. En realidad, como va a argumentarse aquí, la confianza social no es ciega (pero tampoco irracional), ya que resulta de la acumulación y de la actualización de las experiencias vividas por los ciudadanos con organizaciones y asociaciones, y en términos más generales con acontecimientos políticos. La confianza social, por lo tanto, podría ser también una *actitud cultural* creada por la acumulación de experiencias colectivas

o individuales, transmitida por mecanismos de socialización y reactivada ante situaciones políticas o sociales específicas. Y aunque los ciudadanos puedan desarrollar comportamientos cooperativos derivados de expectativas de reciprocidad en determinadas relaciones sociales, cabe asimismo concebir que esos comportamientos estén en alguna medida afectados por actitudes culturales *previas* a la situación del juego *tit-for-tat*, lo que condicionaría las utilidades marginales de las preferencias³. Consiguientemente, la creación de nuevas instituciones o de nuevos contextos organizativos podría no producir, como se mantiene, un incremento axiomático en la confianza social (Jackman y Miller, 1998: 59). Este resultado podría explicarse por las características de diversos factores relacionados con la estructura de las organizaciones y asociaciones y con sus incentivos. Pero cabría también explicarlo por la presencia de un *stock* acumulado de inversiones *frustradas*, por así decir, en capital social, y que se manifiestan en unos niveles colectivamente compartidos de elevada desconfianza que se expresarían con mayor o menor intensidad en las actitudes y comportamientos individuales; no se trataría, pues, como sostienen los racionalistas, de meros atributos individuales de orígenes adscritos cuando no indeterminados. De este modo, no es necesario haber realizado *inversiones* en capital social, ni tener una experiencia propia de los resultados de tales inversiones, para confiar o desconfiar en los demás y en sus acciones. Sólo así sería factible explicar por qué una misma situación relacional, cuando está basada en experiencias diferentes que han dado lugar a distintas predisposiciones culturales, genera resultados (o interpretaciones) contrapuestos. Por lo tanto, las experiencias relacionales individuales son importantes mecanismos de creación de confianza social, pero están claramente condicionados por los presupuestos culturales previos a la interacción.

Existe un problema adicional que los defensores de la aproximación racional no han podido solventar. Muchos estudiosos están de acuerdo en que la formación y evolución de capital social se crea por la interacción de dos de sus elementos, los niveles de confianza social y las redes de cooperación. La confianza «lubrifica» la cooperación, y la cooperación a su vez promueve la confianza (Putnam, 1993: 171). Este proceso interactivo sólo puede alcanzar dos equilibrios, uno de baja intensidad (en la que existe escasez de capital social) y otro de alta intensidad (que está asociado a una comunidad de pleno civismo). Si esto es así, ¿cómo puede pasarse del bajo al alto equilibrio? No es una pregunta fácil de responder. Su formulación esconde la paradoja que se conoce comúnmente como el *bootstrap problem*: «para que pueda crearse capital social, debe existir ya una mínima cantidad del mismo, dado que las redes de obligaciones sólo se pueden construir y mantener en un contexto en el que ya existe un nivel mínimo de confianza entre los individuos» (Whiteley, 1999: 27). Pero, ¿qué ocurre si se carece

3. Al contrario que el capital social así entendido, la confianza social es un rasgo individual, si bien recreado colectivamente en cualquier sociedad. Como se verá, aquí se ha medido esta característica individual utilizando el indicador tradicional de la confianza interpersonal.

incluso de ese mínimo? Las definiciones racionalistas del capital social y de la confianza social están, en nuestra opinión, mal equipadas para contestar a esas preguntas. El análisis del capital social en las nuevas democracias permitiría ensayar una respuesta distinta y que estimamos convincente desde los supuestos culturalistas que estamos planteando. Cabría así pensar que en sus primeros momentos esas democracias no cuentan con capital social: los ciudadanos han sufrido experiencias de una dominación autoritaria durante la cual la vida asociativa fue en el mejor de los casos reprimida, desincentivada o ambas situaciones a la vez. Las transiciones exitosas implican la creación o restauración de un conjunto de instituciones, autoridades, reglas y prácticas democráticas. Si este nuevo marco institucional resulta necesario para generar capital social, ¿hasta qué punto es suficiente? ¿En qué medida las nuevas democracias superan largos pasados autoritarios y logran crear *stocks* suficientes de capital social?

Trataremos de responder a estas preguntas mediante el análisis del caso español. Nuestra hipótesis es que la instauración y el desarrollo de las nuevas instituciones democráticas y las redes de interacción que generan no crean *per se* capital social. El cambio institucional y la política democrática pueden fomentar la creación del capital social hasta cierto punto, pero pueden resultar asimismo insuficientes para romper una situación de equilibrio de baja intensidad. Como en otras democracias recientes, la persistentemente débil vida asociativa de los españoles proporciona fundamentos sólidos para condicionar la evolución del capital social a la presencia cultural de la desconfianza entre los ciudadanos (Torcal, 1995, y en prensa; Van Deth, 1996). Si bien las nuevas instituciones democráticas pueden crear las raíces del capital social, la velocidad a la que éste cambia se encuentra condicionada, como esperamos mostrar, por diferencias intergeneracionales sobre el grado en que los ciudadanos confían unos en otros. Mantenemos también que las interacciones personales apenas constituyen la base del aumento de capital social en las nuevas democracias, sobre todo porque, si exceptuamos las que se dan en las pequeñas organizaciones, suelen ser escasas e irregulares. Un cierto nivel de confianza preexistente entre los individuos lo favorece. Lo que supone, como añade Whiteley (1999: 26-29), que la socialización adquiera una importancia decisiva para la creación de la confianza social y por consiguiente para cualquier aumento significativo de los niveles de capital social. Un nivel previo de confianza social aumenta la *posibilidad* de que se produzca la interacción, pero además, como ya se ha dicho, aumenta las *probabilidades* de que la interacción resulte positiva. En consecuencia, los cambios intergeneracionales en los niveles de confianza adquieren una gran importancia para escapar de las situaciones de equilibrio de baja intensidad (si bien no son el único camino para salir de tales situaciones). Como comprobaremos, esos cambios han sido poco significativos en el caso español.

Los enfoques racionalistas han solido descalificar a los culturales por acudir a explicaciones exógenas y, por lo tanto, deterministas del capital social (por ejemplo, Jackman y Miller, 1998). Para ellos, sólo cabe acudir a mecanismos endógenos (es decir,

a redes de interacción social) que consideran a las instituciones del presente como las creadoras fundamentales del capital social (por ejemplo, Granovetter, 1973 y 1985). Como discutiremos en este artículo, ni esos mecanismos resultan apropiados para dar cuenta de la formación social en una democracia reciente como la española, ni las explicaciones basadas en factores culturales están condenadas al determinismo. En realidad, las explicaciones basadas exclusivamente en el efecto inmediato de las estructuras organizativas y de sus incentivos son ciertamente endógenas, pero olvidan aspectos fundamentales como el peso acumulado de las instituciones del pasado y sobre todo la incidencia de los factores de naturaleza política, según son percibidos por los ciudadanos, en una determinada situación relacional. De ahí que las apreciaciones de determinismo respecto a la definición cultural de capital social sean sólo pertinentes para quienes olvidan el papel que juega la política en los procesos de socialización política, en las características diferenciales de las generaciones políticas o en los criterios actitudinales que iluminan la formación de las preferencias políticas. Contrariamente a lo que suponen Putnam (1993) e Inglehart (1997)⁴, defendemos que la política puede desempeñar un papel importante en la formación de capital social mediante la socialización política y su impacto en la confianza social (Levi, 1996b: 50-51; Sabetti, 1996; Tarrow, 1996). Del mismo modo, concedemos a la política la capacidad de romper situaciones de equilibrio de baja intensidad sin necesidad de que el capital social tenga que resultar producido de manera paulatina a través del recambio intergeneracional, especialmente en momentos de cambios políticos. El papel de la política en la formación del capital social será, pues, el argumento central de las páginas que siguen.

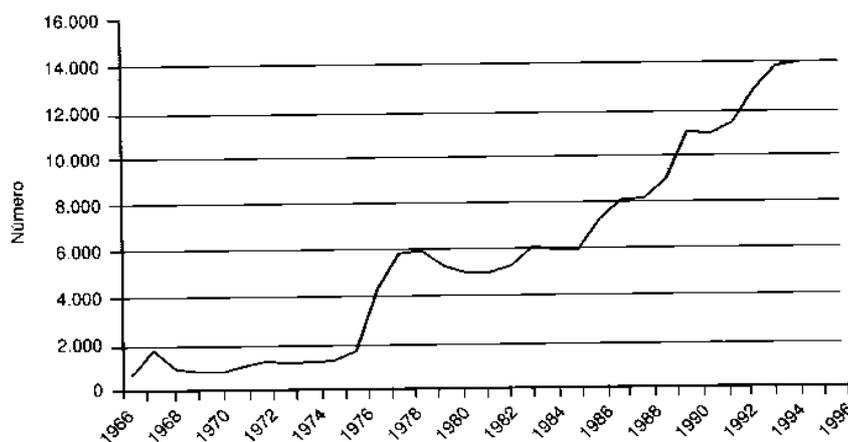
El capital social en España: algunos datos comparados

Al final del franquismo, la vida organizativa en España era extremadamente débil (Linz, 1971). En el inicio de la transición política, dos procesos importantes deberían haberla incrementado. Por una parte, el desarrollo económico, el cambio educativo y la modernización social que comenzaron en los sesenta deberían haber provocado el surgimiento de un mayor número de asociaciones. Por otra, la propia transición política a la democracia, que necesitaba de la creación de partidos y otras organizaciones políticas o ideológicas, junto con el nuevo clima de libertad, deberían haber favorecido la creación de asociaciones de todo tipo. De hecho, esto es lo que parece haber ocurrido, como

4. En un artículo posterior sobre el caso estadounidense, Putnam (1995a) ha considerado, sin embargo, el papel positivo jugado por las instituciones políticas en la creación de capital social.

muestran las cifras de asociaciones creadas anualmente desde 1968 (gráfico 1)⁵. Con la consolidación democrática, en los primeros años ochenta, el número de asociaciones continuó creciendo de manera aparentemente más rápida. A primera vista, pues, las redes organizativas del capital social han estado aumentando en España desde el comienzo del régimen democrático.

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NUEVAS ASOCIACIONES
CREADAS ANUALMENTE EN ESPAÑA, 1966-1996



Fuentes: Registro Nacional de Asociaciones, Ministerio del Interior, y Mota (1999: 48).

Sin embargo, el número de asociaciones no es un indicador precisamente satisfactorio de la fuerza organizativa: no nos dice nada sobre la afiliación, la pertenencia simultánea a distintas organizaciones, la intensidad del compromiso con las mismas o la frecuencia de sus actividades. Y tampoco resulta posible saber si (y cómo) una organización deja de existir efectivamente, aunque sobreviva como un asiento más en el Registro oficial. Pese a ello, el gráfico 1 tiene interés. En primer lugar, muestra la impresionante expansión organizativa ocurrida: desde 1966, cuando sólo había 520 asociaciones registradas⁶, hasta 1996 se inscribió un total acumulado de 170.964 nuevas organizaciones. Este crecimiento resulta aún más llamativo si es considerado en relación con el de la población española en ese mismo período. Un simple *índice de asociatividad* que refleje el número

5. Los datos del gráfico han sido tomados del Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del Ministerio del Interior, y completados por los incluidos en Mota (1999: 48); debemos agradecer a Ángel García del Valle la ayuda prestada para acceder a ellos. En el gráfico no están incluidos los partidos y las asociaciones empresariales, sindicales, deportivas y las de alumnos, que cuentan con registros propios.

6. Este bajo número se debe al inicio de las actividades del Registro en 1966, tras la aprobación de una Ley de Asociaciones en 1964.

de organizaciones por cada 100.000 habitantes expresa claramente el extraordinario cambio producido: desde un 1,6 en 1966 a un 432,3 en 1996 ⁷. En segundo lugar, el gráfico 1 permite identificar distintas oleadas en el ritmo de creación: lento en los años finales del franquismo, intenso en el período de transición a la democracia, estable en los ochenta y relativamente intenso de nuevo en los noventa. Por supuesto, los años cruciales fueron los del cambio político; sólo entre 1977 y 1982 se registraron más de 26.000 nuevas asociaciones, lo que equivale a un aumento del 380 por 100 con respecto a 1976. El tercer aspecto destacable es el del desarrollo territorial. El tejido asociativo en España sigue al parecer estando caracterizado por el localismo, los débiles lazos entre organizaciones similares y la deficiente comunicación entre todas ellas (Prieto-Lacaci, 1994: 202-203). En la actualidad, casi cuatro de cada diez organizaciones son locales, tres regionales y una provincial; las organizaciones estatales representan sólo el 12 por 100 del total (Mota, 1999: 48). Como era de esperar, la implantación del Estado de las autonomías ha propiciado la formación de organizaciones regionales a través de la federación de las locales y provinciales; y la política de subvenciones de las nuevas autoridades autonómicas ha incrementado también la declaración de actividades regionales por más que se lleven a cabo efectivamente en algún ámbito local. Por comunidades autónomas, las tasas de asociacionismo llevan ya cierto tiempo convergiendo entre las más y las menos desarrolladas, en un proceso de acercamiento que refleja la aproximación regional de los niveles de renta (Mota, 1999: 51). Finalmente, debería también considerarse la naturaleza de sus actividades. Según el criterio utilizado por el Registro de Asociaciones, casi el 40 por 100 se clasifica como culturales o ideológicas, el 15 por 100 como educativas y otro 15 por 100 como organizaciones juveniles o deportivas. Las asociaciones económicas y profesionales suponen el 6 por 100, los grupos familiares y de consumidores el 5 por 100 y las asociaciones filantrópicas el 4 por 100. Y mientras el porcentaje de organizaciones culturales e ideológicas ha crecido de manera continuada sobre el total en la última década, el resto de organizaciones ha disminuido.

Como ya se ha mencionado antes, este tipo de datos no arroja luz alguna sobre los niveles de afiliación de las diferentes asociaciones ⁸. Y tampoco ofrece información sobre el número de organizaciones «vivas», es decir, aquellas que en la práctica definen la densidad del tejido asociativo en un momento dado. En suma, no permite la realización de estimaciones ni sobre la presencia de redes de intercambio social ni sobre el grado de confianza social que podrían generar. Cabe obtener una idea aproximada al respecto examinando los porcentajes de afiliación a los partidos políticos y a los sindicatos en España. Los primeros han solido encontrarse entre los más bajos de Europa

7. El índice ha evolucionado de manera bastante regular: 22,8 en 1970, 36 en 1975, 107,68 en 1981, 178,33 en 1986 y 287,71 en 1991. Véase también Linz (1971).

8. Para una estimación de la afiliación a los distintos tipos de asociaciones, véase Mota (1999: 53-55).

incluso en los momentos de la transición (Montero, 1981; Bartolini, 1983). Al final de los ochenta, el porcentaje de miembros sobre los electores era de 10,5 en el conjunto de Europa occidental; España ocupaba el último lugar de la lista con un escaso 2 por 100 (Katz, Mair *et al.*, 1992: 333; Morlino, 1998: 170 ss.). La *ratio* miembros/votantes de cualquier partido es asimismo extremadamente baja. En las elecciones generales de 1996, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvieron casi 19 millones de votos (lo que supuso un 76,3 por 100 de los válidos emitidos); sin embargo, sus afiliados sólo sumaban conjuntamente alrededor de los 900.000. Para el PP, la proporción de sus miembros con respecto a sus votantes en 1996 era del 6 por 100, y la de sus miembros con respecto al electorado, del 1,6 por 100; para el PSOE, ambos porcentajes eran 3,9 y 1,1 por 100, respectivamente (Van Biezen, 1998; Méndez-Lago, 1998; Morales, 1998a). Los bajos niveles de afiliación partidista en España están en consonancia con la aún más débil propensión de los españoles a desempeñar un papel activo dentro de los partidos, con la escasa penetración organizativa de los partidos en la sociedad y con la debilidad de la identificación partidista en el electorado.

Mucho de esto es también aplicable a los sindicatos. Francia y España poseen los índices de densidad sindical más bajos de Europa (calculados como la proporción de asalariados activos o desempleados que están afiliados los sindicatos) (Price, 1989; Ebbinghaus y Visser, 1999). Como era de esperar, el reconocimiento de la libertad sindical y la formación de numerosas organizaciones sindicales en 1977 dio lugar a un aumento espectacular, confuso y de corta duración en la afiliación sindical. Aunque descendió bruscamente de manera casi inmediata, ha ido aumentando desde finales de los ochenta como consecuencia del ciclo económico, de una más estrecha colaboración entre las distintas federaciones de sindicatos y de la mayor autonomía funcional de los partidos y de los actores económicos (Astudillo, 1998). En 1994, la densidad sindical en España era del 17,2 por 100 (Jordana, 1996: 215). La reticencia de los trabajadores españoles a afiliarse a los sindicatos ha colocado en una situación paradójica a las dos mayores federaciones sindicales, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO): si bien disfrutaban de un considerable reconocimiento institucional en la arena política y de hegemonía en las grandes empresas, su presencia e influencia en las empresas medianas y pequeñas, que son con mucho las más numerosas, resultan considerablemente menores.

Los datos procedentes de encuestas nos ofrecen una imagen más completa de las dimensiones del capital social en España. En términos generales, muestran que los niveles de afiliación y participación en asociaciones voluntarias, organizaciones intermedias y nuevos movimientos sociales son relativamente bajos en comparación con los de la mayoría de las democracias europeas⁹. Como se aprecia en la tabla 1, los españoles

9. Para una discusión de esos datos y de los problemas que plantean con respecto a la construcción de una medida equivalente entre los distintos países, puede verse Van Deth y Kreuter (1998).

pertenecen a, o trabajan en organizaciones voluntarias en menor medida que los ciudadanos de cualquiera de los restantes países seleccionados¹⁰. Esto no sólo es aplicable a los partidos políticos y a los sindicatos, sino también a las muchas organizaciones de la sociedad civil que dependen del trabajo voluntario de los ciudadanos. Más aún, si bien el número de asociaciones ha crecido en los últimos años, los niveles de participación de los españoles en esas organizaciones han permanecido básicamente estables desde comienzos de los ochenta: en 1981 el 69 por 100, en 1990 el 66 por 100 y en 1994 el 68 por 100 no pertenecían a ninguna organización. En 1993, el 76 por 100 de los españoles decía no pertenecer a ninguna organización, y, lo que es más importante, sólo un 18 por 100 declaraba pertenecer a una organización, un 5 por 100 a dos, un 2 por 100 a tres y tan sólo un 1 por 100 a más de tres (Gunther y Montero, de próxima publicación).

TABLA 1.
AFILIACIÓN Y TRABAJO VOLUNTARIO EN ORGANIZACIONES
EN LAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES, 1981 Y 1990 *

<i>Países</i>	<i>Afiliación</i>		<i>Trabajo voluntario</i>	
	<i>1981</i>	<i>1990</i>	<i>1981</i>	<i>1990</i>
Islandia	—	89	—	44
Holanda	62	83	27	44
Estados Unidos	—	69	—	44
Alemania Occidental....	50	65	73	29
Bélgica	42	56	21	27
Austria	—	52	—	29
Gran Bretaña	52	50	22	20
Irlanda	66	48	22	26
Dinamarca	62	46	54	21
Francia	27	36	15	21
Italia	26	33	17	22
Portugal	—	32	—	18
España	31	20	23	7

* Porcentajes de quienes declaran ser miembros y trabajar voluntariamente en al menos una organización. Los países están ordenados de acuerdo con los promedios decrecientes en ambos años.

Fuentes: World Values Surveys, 1981-1982 y 1990-1991.

10. A los encuestados se les presentó una lista de asociaciones y organizaciones, y se les preguntó si pertenecían a ellas. Esta lista tenía 10 elementos en 1981, 16 en 1990 y 12 en 1994. Los porcentajes en la tabla 1 han sido calculados recodificando las variables que miden la afiliación como 0 (no pertenencia) y 1 (pertenencia), y creando luego una nueva variable, mediante la suma de todas ellas. Los porcentajes de trabajo voluntario se han calculado de manera similar.

Pero podría decirse que las encuestas no reflejan el nivel real de asociacionismo voluntario. De ser así, cabría esperar entonces que éste fuera un fenómeno internacional. Y, sin embargo, se encuentran diferencias significativas en los datos de varios países europeos (Curtis, Grabb y Baer, 1992; Dekker y Van den Broek, 1998). Más aún, el nivel comparativamente bajo de participación en asociaciones voluntarias en España se confirma no sólo por los datos agregados ya mencionados, sino también por otros indicadores muestrales, como, por ejemplo, el trabajo voluntario o el apoyo financiero a dichas organizaciones (Baumgartner y Walker, 1988). La información ofrecida en la tabla 1 recoge claramente que la diferencia entre los ciudadanos españoles y los europeos es aún mayor con respecto a la cantidad de trabajo voluntario que se realiza para estas organizaciones (véase también Van Deth, 1996) ¹¹.

Por otra parte, se ha argumentado que la sociabilidad española se caracterizaría ante todo por el reciente incremento de las asociaciones voluntarias de «naturaleza societal» (es decir, las de consumidores, de derechos humanos, ecológicas, de defensa de los derechos de los arrendatarios, etc.), y que habría dado lugar a una sociedad civil vivaz, semiespontánea, blanda y con activas redes familiares (Pérez Díaz, 1996: 62-65). No parece, sin embargo, que este tipo de diagnósticos sea acertado. Dejando al margen la escasa contribución de la sociabilidad familiar a la dimensión del capital social, las tendencias asociativas de los españoles, incluidos los jóvenes, durante los últimos años no han caminado en esa dirección. Los datos relativos a España de la World Values Survey de 1990, por ejemplo, destacan por los bajos niveles de afiliación e implicación a lo largo de todo el espectro de organizaciones —ecológicas y pacifistas, de derechos humanos y juveniles, deportivas y recreativas, culturales y artísticas—, así como de las asociaciones comunitarias. De hecho, España se encuentra entre los países occidentales con los niveles más bajos de afiliación a organizaciones «sociales»: en 1990, un 88 por 100 de los encuestados declaraba que *no* pertenecía a ninguna organización de ese tipo ¹². Por tanto,

11. Estamos de acuerdo con Gundlach (1995) en que el activismo debería medirse a través de instrumentos más sofisticados, sobre todo en el caso de las asociaciones de nuevo cuño, en las que la afiliación no es ya tan importante. Sin embargo, como hemos visto en la tabla 1, la distribución de personas que afirman realizar algún trabajo voluntario presenta pocas diferencias con respecto a la de quienes dicen pertenecer a alguna asociación. Además, no todas las nuevas formas de participación (por ejemplo, la pertenencia a organizaciones en las que la actividad se limita al simple pago de cuotas o al uso ocasional de contribuciones económicas [la denominada «*checkbox membership*»]) producen capital social, como argumenta Maloney (1999). Es más, consideramos que la determinación de los niveles de capital social debería incluir la afiliación a organizaciones más tradicionales como los partidos políticos y los sindicatos. Como se ha destacado con frecuencia, esta afiliación podría producir más capital social que la de las boleras y los clubes deportivos (Boix y Posner, 1998 y 2000; Tarrow, 1996).

12. El orden de los restantes países era el siguiente: Portugal, 82 por 100; Italia, 80; Francia, 73; Austria y Gran Bretaña, 72; Irlanda, 66; Bélgica, 61; Estados Unidos, 60; Alemania Occidental e Islandia, 54; Dinamarca, 49, y Holanda, 33. Las cifras se refieren a la suma del porcentaje acumulado de quienes declaran *no* ser miembros de alguna organización educativo-cultural, de derechos humanos, de ayuda al tercer mundo, ecológica, pacifista; o de alguna organización juvenil, club deportivo o de ocio, u organización pro derechos de los animales; o de alguna asociación local voluntaria para la lucha contra la pobreza, el desempleo, la discriminación racial

la débil afiliación a organizaciones tradicionales como los partidos y los sindicatos no está compensada con la producida a esas nuevas asociaciones. La evolución de la afiliación por organizaciones desde comienzos de los ochenta confirma esta debilidad. Como puede verse en la tabla 2, el descenso en el número de miembros de sindicatos y organizaciones religiosas no ha estado acompañado por aumento significativo alguno en las «societales». Estas pautas parecen haberse mantenido hasta finales de los años noventa (Orizo, 1996: 120-121). Y, lo que resulta mucho más indicativo, parecen confirmarse entre los jóvenes españoles, sin que entre ellos tampoco hayan sido compensadas por una mayor inclinación hacia los nuevos movimientos sociales (Orizo, 1999: 71), o una mayor participación en las actividades de las organizaciones de voluntariado (González Blasco, 1999: 243).

TABLA 2.

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES VOLUNTARIAS EN ESPAÑA, 1981-1996

(En porcentajes)

<i>Organizaciones</i>	<i>1981</i>	<i>1990</i>	<i>1994</i>	<i>1996</i>
Partidos.....	3	1	2	2
Sindicatos	11	5	6	5
Religiosas	15	6	7	6
Deportivas	—	5	9	10
Ocio.....	—	—	11	—
Caritativas	5	—	7	—
Culturales	5	4	7	8
Juveniles	3	1	2	4
Derechos humanos.....	1	1	2	—
Ecologistas.....	—	1	2	—
Feministas	—	1	1	—
Pacifistas.....	—	1	1	—
Trabajo voluntario.....	—	—	—	5
Vecinos	—	—	—	11
Ninguna	69	66	68	64
<i>(n)</i>	<i>(2.303)</i>	<i>(2.637)</i>	<i>(5.087)</i>	<i>(2.481)</i>

Fuentes: Para 1996, Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); para los restantes años, Orizo (1996: 135-140).

o el problema de los sin hogar. Para un análisis de las pautas de afiliación a distintos tipos de organizaciones en España, véase Morales (1998b).

El nivel relativamente bajo de la vida asociativa en España resulta congruente con una serie de características actitudinales y de comportamiento que, como demostraremos más adelante, están relacionadas con el capital social. Una de estas características es el también relativamente bajo nivel de confianza interpersonal, que supone a su vez un indicador básico de la confianza social (Almond y Verba, 1963; Newton, 1999a y 1999b; Putnam, 1993). La tabla 3, que contiene la distribución de los niveles de confianza interpersonal en varias democracias, indica que existen dos grupos de países al respecto, con Alemania Occidental como línea divisoria (pero con una clara tendencia al alza en los últimos años)¹³. A poca distancia está el caso español, encabezando el grupo de países en los que el nivel de confianza en los otros conciudadanos es reducido y tiene incluso tendencia a bajar (con la excepción de Italia). Al comienzo de los setenta sólo dos de cada diez españoles declaraban que podían confiar en sus conciudadanos (López Pintor, 1982: 158). Casi treinta años después esta cifra, pese a los cambios políticos, culturales, sociales y económicos ocurridos, ha evolucionado más bien poco: sólo una tercera parte afirma tener confianza en otras personas (tabla 4).

TABLA 3.
CONFIANZA INTERPERSONAL EN EUROPA OCCIDENTAL, EN ESTADOS UNIDOS
Y EN LATINOAMÉRICA, 1981-1997 *

<i>Países</i>	<i>1981</i>	<i>1990</i>	<i>1997</i>	<i>Media 1981-1997</i>
Brasil.....	—	7	3	5
Perú.....	—	—	5	5
Venezuela.....	—	—	14	14
Portugal.....	—	21	—	21
Argentina.....	27	23	17	22
Uruguay.....	—	—	22	22
Chile.....	—	23	22	22,5
Francia.....	25	23	—	24
Italia.....	26	35	—	30
Bélgica.....	30	33	37	31,5
España.....	34	34	30	33
Alemania Occidental....	30	39	42	37
Gran Bretaña.....	44	44	31	40
Islandia.....	42	44	—	43

13. La pregunta ha solido ser la siguiente: «¿Diría usted que en general se puede confiar en la mayoría de la gente, o bien que nunca se es lo bastante prudente cuando trata uno con los demás?»

<i>Países</i>	<i>1981</i>	<i>1990</i>	<i>1997</i>	<i>Media 1981-1997</i>
Irlanda	40	47	—	43,5
Estados Unidos.....	45	50	36	44
Holanda	46	56	—	51
Dinamarca.....	56	58	—	57
Suecia.....	57	66	60	61
Noruega.....	61	65	65	64

* Porcentajes de quienes declaran confiar en la mayoría de la gente. La no respuesta está excluida de la base de los porcentajes. Los países están ordenados según la media del período 1981-1997.

Fuentes: World Values Survey, 1981-1982, 1990-1991 y 1995-1997.

TABLA 4.
CONFIANZA INTERPERSONAL EN ESPAÑA, 1980-1997
(En porcentajes)

	<i>1980</i>	<i>1981</i>	<i>1987</i>	<i>1990</i>	<i>1994</i>	<i>1996</i>	<i>1997</i>
Confianza.....	22	33	25	32	29	34	29
No confianza	74	61	73	62	67	61	68
No sabe, no contesta	4	6	2	6	4	5	4
(n).....	(1.200)	(2.303)	(2.499)	(4.147)	(2.491)	(2.481)	(1.211)

Fuentes: Para 1981, 1990 y 1997, World Values Survey, 1980-1981, 1990-1991 y 1995-1997, respectivamente; para los restantes años, Banco de Datos del CIS.

La escasa confianza interpersonal de los españoles no es una característica nueva, y tampoco ha pasado desapercibida (Merkl, 1988: 41-42; Newton, 1999b: 175-176). López Pintor (1982: 156) la ha calificado como «individualismo insolidario», un síndrome que sería en parte también responsable de su escasa vida organizativa durante las tres últimas décadas. Las nuevas democracias parecen compartir también ese síndrome individualista. Pero no es un fenómeno exclusivo de ellas: está también presente en Italia, Francia y Bélgica. La existencia de dos grupos diferenciados, que no uniformes, se combina con tendencias evolutivas diferenciadas. Mientras en ciertos países la confianza interpersonal tiende a aumentar (Alemania, Bélgica Holanda e Italia), en otros, en cambio, se observa lo contrario (Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina); la estabilidad es la tónica dominante en otros como España y Chile, de un lado, y Dinamarca, Noruega y Suecia, de otro. Frente a quienes observan un aumento generalizado en los niveles de confianza interpersonal en todas las democracias occidentales (por ejemplo, Newton

[1999b: 175-178]), parece más prudente afirmar que existen diferencias sustanciales entre ellos, y que sus variaciones dependen más de factores propios de cada país que de tendencias sociales o culturales que afecten a todos por igual (Hall, 1999).

En suma, el número de asociaciones creadas en España durante los treinta últimos años ha crecido exponencialmente. Pero sólo algo más de un millón de españoles pertenece a los partidos políticos, y alrededor de dos millones de trabajadores o asalariados son miembros de los sindicatos. A lo largo de los últimos treinta años, sólo tres de cada diez españoles dicen haber pertenecido a alguna asociación; y las nuevas organizaciones son mayoritariamente locales, están fragmentadas, y probablemente disfrutará de una corta existencia¹⁴. Esta evolución ha estado acompañada de un escaso aumento en unos niveles de confianza interpersonal ya de por sí bajos: dos de cada tres españoles expresan consistentemente su desconfianza hacia sus conciudadanos. Es claro que, tras el repunte natural en la vida asociativa en España provocada por la transición a la democracia, el capital social no ha ido más allá de una situación de equilibrio de baja intensidad.

Generaciones políticas y confianza: efectos y diferencias

Hemos destacado antes que la situación de equilibrio de baja intensidad que caracteriza al capital social en España ha persistido a pesar de los grandes cambios económicos, políticos e institucionales de las tres últimas décadas. Contrariamente a lo que suele suponerse (como hace, por ejemplo, Levi [1996a]), los regímenes democráticos no producen capital social *per se*. De hecho, el caso español evidencia que el funcionamiento de la política democrática no produce un aumento axiomático en el capital social, por lo menos en lo que se refiere a la disposición cooperativa. Creemos que para explicar este resultado paradójico hay que tener en cuenta factores de naturaleza cultural (y usualmente medidos como actitudes y orientaciones políticas). Más específicamente, pensamos que la evolución del capital social en las nuevas democracias está hipotéticamente condicionada por la presencia actitudinal de la confianza entre los ciudadanos; una presencia que no es sólo un atributo individual, como suele caracterizarse en los enfoques racionalistas, sino también la expresión individual de un fenómeno cultural colectivo. La democracia puede crear redes de intercambio asociativo. Pero el incremento de la confianza interpersonal depende tanto de las instituciones

14. Es cierto que la tasa de afiliación a estas organizaciones no refleja la verdadera importancia de la presencia asociativa. Pero su influencia está muy dividida, depende excesivamente del tema alrededor del cual se constituya la asociación y de los sectores sociales a los que afecta, y suele durar poco tiempo (una duración que, según es ya habitual, está relacionada con la curva de atención de los medios de comunicación). Es probable que la visibilidad pública de algunas pequeñas organizaciones anime a más personas a actuar como *free-riders* sobre los esfuerzos de otras, si bien esta cuestión debería analizarse con más detalle.

democráticas y de la naturaleza de las redes asociativas, como del grado en el que los ciudadanos pertenecientes a distintas generaciones alberguen niveles diferentes de esa confianza.

Para comprobar esta hipótesis hemos efectuado un estudio de sus pautas de cambio y continuidad entre distintas generaciones. Se trata, en definitiva, de averiguar si existen ciertas *generaciones políticas* que se distingan por poseer niveles diferenciados de confianza interpersonal, y de examinar hasta qué punto esas diferencias responden a pautas determinadas. Una generación *política* es aquel «grupo de seres humanos que han estado expuestos a las mismas experiencias históricas durante sus años de formación» (Rintala, 1979: 8). Como señalaba Mannheim (1952: 290) en su clásico estudio, «los individuos que pertenecen a una misma generación y que comparten el mismo año de nacimiento se caracterizan por estar ubicados en un lugar común en el proceso histórico (...)». En este sentido, las generaciones sólo adquieren significado cuando los individuos que las integran comparten experiencias políticas y sociales singulares que marcan su manera de pensar y actuar, distinguiéndose así de otras (Mannheim, 1952: 310). De ahí que las generaciones políticas puedan distinguirse cuando los rasgos actitudinales o las pautas de comportamiento de quienes las componen resulten en términos relativos distintas de los rasgos y pautas de las restantes generaciones como consecuencia de los acontecimientos políticos y sociales acaecidos durante sus años de formación. Además, y como cabía esperar, las generaciones tienden a perfilarse con mayor nitidez en aquellas sociedades que han conocido cambios sustanciales en cualquiera de sus órdenes.

En esta sección realizaremos un análisis de cohortes mediante datos transversales de encuestas recogidas a lo largo de varios años. Un diseño de este tipo puede detectar tres efectos. En primer lugar, puede identificar un efecto de *cohorte*: algunas actitudes reflejan diferencias generacionales de manera tan consistente y duradera como para verse apenas alteradas por acontecimientos políticos específicos. El segundo es un efecto de *período*: algunas opiniones o actitudes varían en todas las generaciones como resultado de acontecimientos que afectan a todas ellas a la vez, sin que ello produzca necesariamente un cambio actitudinal consistente o duradero. El tercero es el efecto del *ciclo vital*: algunas actitudes cambian a medida que la cohorte envejece. Si el análisis del capital social por cohortes revela efectos de ciclo vital (es decir, si la confianza social aumenta a medida que envejecen los ciudadanos), se reforzaría el argumento de que las actitudes se adquieren a través de un proceso continuado de aprendizaje, que se extiende desde la adolescencia hasta la vejez¹⁵. Por el contrario, la existencia de efectos de *período* demostraría que el nivel de capital social en España puede variar como resultado de procesos de movilización y de creación de nuevas asociaciones: las

15. De manera más específica, se ha argumentado de forma ya clásica que si bien las personas jóvenes contemplan la política como algo remoto y ajeno, estas mismas personas se interesan más por la política a medida que maduran y adquieren mayores responsabilidades sociales y económicas (Nie, Verba y Kim, 1974).

interacciones cara a cara y las redes de intercambio social generadas por ellas podrían haber sido, por lo tanto, la fuente principal, al menos temporalmente, de la confianza social. En fin, los efectos de cohorte evidenciarían la importancia de la socialización preadulta en la formación de la confianza social.

La detección de estos distintos efectos puede hacerse por dos procedimientos. El primero, por medio de la especificación de un modelo apropiado¹⁶, y el segundo, por medio de visualización gráfica. Pero, además, los análisis de cohortes deben explorar la presencia de otros aspectos importantes. Y es que cuando se detecta un efecto generacional resulta esencial averiguar el alcance de las diferencias intergeneracionales; es decir, ya no sólo comprobar si hay diferencias entre las generaciones, sino medir la intensidad de las mismas. Si las diferencias entre las distintas generaciones son constantes pero *cuantitativamente pequeñas*, las actitudes políticas mantienen una notable continuidad intergeneracional, por lo que los cambios culturales producidos por el reemplazo de las generaciones más jóvenes por las de mayor edad serán improbables. En cambio, si las diferencias entre las generaciones son constantes y además *cuantitativamente elevadas*, cabrá presumir la existencia de diferencias intergeneracionales significativas, por lo que, como consecuencia, el cambio cultural vendrá de la mano del natural reemplazo generacional.

Dadas las discusiones sobre la delimitación de los tramos de edad de las cohortes y la fijación de la edad básica para la socialización¹⁷, hemos seleccionado la etapa de la denominada «maduración política» (de los diecisiete a los veinticinco años) por dos razones. De un lado, por el mayor impacto de la socialización de agentes secundarios y el paso a un segundo plano de la familia y la escuela; de otra, por su considerable solapamiento con acontecimientos económicos, sociales y políticos de importancia capital en la reciente historia española. Hemos creado así seis cohortes diferentes¹⁸, de las que

16. Para detectar estos efectos suele acudir-se a los llamados *modelos APC* [Edad, Período, Cohorte (*Age, Period, Cohort*)]. Sin embargo, los que hemos construido a continuación de los gráficos 2, 3 y 4 no son modelos APC, ya que no se ha incluido la edad a causa de la muy elevada multicolinealidad que presentaban (los niveles de tolerancia eran próximos a cero y los VIF sumamente altos). La razón estriba en que cualquiera de esos tres efectos es una combinación lineal de los otros dos (es decir, *edad = período-cohorte*). Para solucionar este problema se ha optado por suprimir una de las variables mediante los siguientes pasos. Primero, se hizo un modelo con la edad controlada por la cohorte. En ellos la edad no era significativa, es decir, no se detectaba efecto de ciclo vital. Una vez descartada la edad, se comprobaron dos modelos por actitud, una incluyendo la cohorte como variable ordinal y otra presentando las cohortes como variables dicotómicas y con la de mayor edad como variable de referencia. Los efectos de período se incluyeron desde el principio como una variable dicotómica (0-1) con el fin de detectar los dientes de sierra de dichos efectos. En todos los casos los indicadores han resultado robustos y la multicolinealidad ha desaparecido pese al elevado R^2 de la mayoría de los modelos. Para dos discusiones de estos problemas y la especificación de los modelos APC pueden verse Mason *et al.* (1973) y Fienberg y Mason (1985).

17. Para una discusión al respecto puede verse Krosnick y Alwin (1989).

18. La más vieja (la sexta, o la de la *monarquía*) está compuesta por los nacidos antes de 1914, que en 1977 (fecha de las primeras elecciones democráticas) tenían sesenta y tres o más años; habían cumplido los diecisiete años antes de 1931, lo que significa que vivieron acontecimientos como los años finales de la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Miguel Primo de Rivera y la llegada de la Segunda República. La siguiente

sólo utilizaremos cinco para nuestro análisis¹⁹. Como detallaremos en seguida, el primer hallazgo importante del análisis de cohortes es que la confianza social muestra un considerable efecto de cohorte, pese a la presencia de pequeños efectos de período. La siguiente tarea consistirá en preguntarnos hasta qué punto esas actitudes varían en las distintas generaciones: en otras palabras, el tamaño de sus diferencias. Pero antes quizá sea útil presentar un ejemplo del análisis de cohortes acudiendo a su relación con los niveles educativos. Como es sabido, durante las últimas décadas el desarrollo económico, la modernización social y el despliegue de políticas públicas socialdemócratas han facilitado un extraordinario incremento en el nivel educativo de los españoles (Núñez, 1992: 166-178). Pero no ha afectado a todos por igual: las generaciones más jóvenes se han beneficiado de ese incremento en mayor medida. Los distintos niveles educativos se adquieren principalmente durante las dos primeras décadas de la vida de los individuos y suelen permanecer luego constantes. Por ello, la diferencia en el nivel de educación debe mostrar un efecto de cohorte muy estable, y con diferencias generacionales notables.

El gráfico 2, que recoge el nivel educativo de los españoles por cada cohorte (a excepción, como ya hemos señalado, de la primera, la de la *democracia*), demuestra con datos de encuesta que el porcentaje de individuos dentro de cada cohorte que declara haber cursado «al menos el bachiller superior» es mayor mientras más joven sea la cohorte. Se trata, pues, de un efecto puro de cohorte. Como se comprueba en la ecuación [1], sólo la variable cohorte tiene significación estadística, mientras que carecen de ella todos los efectos de período²⁰. Si desagregamos las cinco categorías de la variable cohorte en cuatro variables dicotómicas que recojan la pertenencia a cada una de ellas, puede observarse, como se incluye en la ecuación [2], que el mayor cambio en el nivel

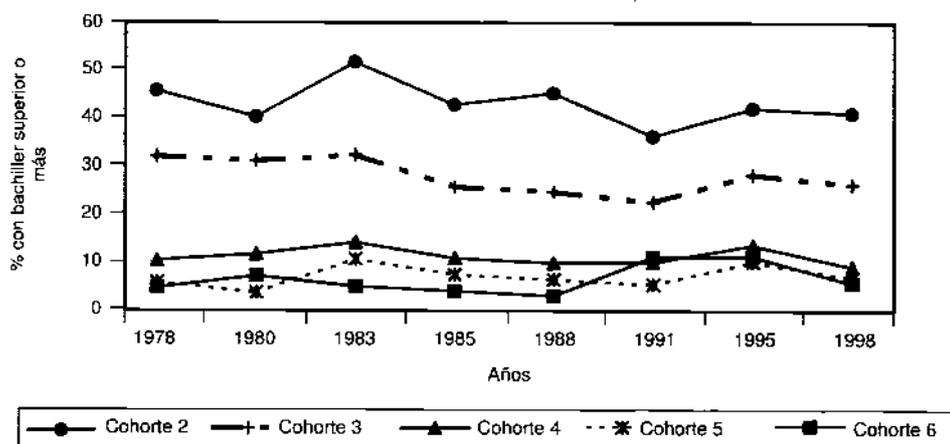
generación (la quinta, o la de la *guerra civil*) está integrada por quienes, nacidos entre 1915 y 1923, cumplieron los diecisiete años entre 1932 y 1940, lo que supone que entraron en el período de maduración política durante la Segunda República y la guerra civil. La siguiente (la cuarta generación, o la de la *posguerra*) está formada por los nacidos entre 1924 y 1943; cumplieron los diecisiete años entre 1941 y 1960, y alcanzaron la etapa de socialización política adulta en la posguerra, la represión política y la depresión económica. La tercera generación (o la de la *liberalización*) engloba a los nacidos entre 1944 y 1957, que, por llegar a los diecisiete años entre 1961 y 1974, maduraron políticamente durante el desarrollo económico de los sesenta. La segunda generación (o la de la *transición*) acoge a los nacidos entre 1958 y 1965, que por cumplir los diecisiete años entre 1975 y 1982 conocieron la transición política y la consolidación democrática. Por último, la primera cohorte (o la de la *democracia*) acoge a los nacidos después de 1966: llegaron a los diecisiete años a partir de 1983, por lo que han sido socializados durante la etapa de los gobiernos socialistas.

19. La generación más joven (es decir, la de la *democracia*) no se ha utilizado en el análisis por dos razones. Primera, porque su visualización gráfica resultaba muy dificultosa debido a su similitud con la anterior (esto es, la de la *transición*). Y segunda y más importante, porque se trata de una generación en proceso de formación cuyos integrantes se han ido combinando con los nuevos miembros que se incorporaban por el transcurso de los años bajo estudio; es lo que técnicamente se denomina *hidden attrition* (Fienberg y Mason, 1985: 64). Además, las encuestas de los primeros años no contienen obviamente a esta primera generación al no haber cumplido todavía sus integrantes los dieciocho años.

20. Debe recordarse nuevamente que éste no es estrictamente un modelo APC, ya que ni se ha incluido la edad ni además se ha utilizado además la cohorte como variable ordinal por resultar un modelo inidentificable.

educativo (es decir, la cohorte que más se diferencia con respecto a la de mayor edad, que se ha dejado como variable de referencia) se produce en la segunda generación, la de la *transición*, con un incremento significativo del 32,10 por 100 como media en el porcentaje de educados; le sigue la de la *liberalización*, con un 18,7 por 100. Ambas generaciones protagonizaron la gran transformación educativa de la población española como consecuencia del despegue económico tras los años de la miseria autárquica, de la relativa prosperidad que siguió a los planes de estabilización y, más particularmente, del crecimiento de las universidades. En contraste, la cuarta generación, la de la *autarquía*, apenas supone un incremento de 4,12 por 100 con respecto a la de mayor edad (si bien el coeficiente resulta significativo). De este modo, el análisis de cohortes con la educación muestra cómo el reemplazo intergeneracional es la fuente del cambio educativo en España. Y confirma la fiabilidad de este diseño de investigación longitudinal al evidenciar que los cambios educativos de los españoles respondieron a pautas esperadas según las teorías de la modernización: la educación aumentó entre las generaciones que conocieron una cierta prosperidad económica y un cierto desarrollo social.

GRÁFICO 2
COHORTES Y EDUCACIÓN EN ESPAÑA, 1978-1998



Fuentes: Banco de Datos del CIS (estudios 1157, 1237, 1461, 1788, 1970, 2154 y 2240).

Ecuación [1]: Modelo de los efectos de período y de cohorte en la educación

$$Y = 51,200 + 8,25 * - 1 * P_5 + 2,4 * P_6 - 1,8 * P_7 - 2,2 * P_8 - 3 * P_9 + 0,4 * P_{10} - 2,6 * P_{11}$$

Probabilidad = (0,000) (0,784) (0,513) (0,623) (0,548) (0,414) (0,913) (0,479)

$R^2 = 0,845$

Ecuación [2]: Modelo de los efectos de período y de cohorte desagregada en la educación

$$Y = 7,1 + 32,12 * X_1 + 18,7 * X_2 + 4,12 * X_3 + 0,5 * X_4 - 1 * P_5 + 2,4 * P_6 - 1,8 * P_7 - 2,2 * P_8 - 3 * P_9 + 0,4 * P_{10} - 2,6 * P_{11}$$

$$\text{Probabilidad} = (0,000) (0,000) (0,003) (0,700) (0,784) (0,513) (0,623) (0,548) (0,414) \\ (0,913) (0,479)$$

$$R^2 = 0,972$$

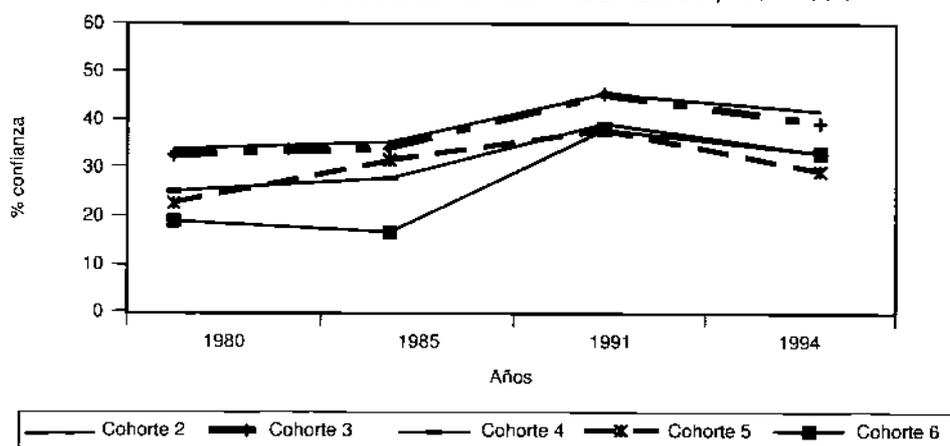
Variables del modelo: X = Cohorte agregada; X₁ = Cohorte 2 (transición); X₂ = Cohorte 3 (liberalización); X₃ = Cohorte 4 (autarquía); X₄ = Cohorte 5 (guerra civil); P₅ = Período 2 (1980); P₆ = Período 3 (1983); P₇ = Período 4 (1985); P₈ = Período 5 (1988); P₉ = Período 6 (1991); P₁₀ = Período 7 (1995); P₁₁ = Período 8 (1997).

Variables de referencia: Cohorte 6 (monarquía) y Período 1 (1978).

Podemos volver ahora al análisis de la confianza social. Tras las transformaciones económicas, sociales y políticas de las últimas décadas, ¿existen con respecto a la confianza interpersonal pautas similares a las que hemos observado con la educación? La respuesta es negativa. Como muestra el gráfico 3, la confianza presenta un claro efecto de cohorte, pero no pueden apreciarse las pautas de cambio intergeneracional observadas en el modelo de la educación. Las diferencias intergeneracionales de los ciudadanos que declaran «confiar en la gente» existen (los jóvenes confían un poco más), pero son muy pequeñas. La confianza no se modifica en función del ciclo vital; no aumenta a causa del envejecimiento (obsérvesc que no hay un incremento progresivo de todas las líneas), pero al mismo tiempo apenas mejora entre una generación y otra. De acuerdo con la ecuación [3], se trata de un modelo de efectos mixtos de cohorte sin cambio intergeneracional: aunque domina el efecto de cohorte, algunos efectos de período resultan importantes y estadísticamente significativos. La continuidad intergeneracional se aprecia en la ecuación [4], en la que los coeficientes de las generaciones segunda (la de la *transición*) y tercera (la de la *liberalización*) son muy pequeños (9,7 y 8,7 por 100, respectivamente), aunque estadísticamente significativos. Además, la diferencia con respecto a la cuarta (la de la *autarquía*, con un coeficiente del 3,5 por 100) es muy pequeña. Esta pauta de continuidad evidencia que las múltiples transformaciones económicas, políticas y sociales ocurridas en las últimas décadas apenas han afectado a la confianza de los españoles en sus conciudadanos. De hecho, los bajos niveles de confianza interpersonal recogidos en la anterior tabla 4 estaban ya presentes con anterioridad a la llegada del cambio político, y han permanecido estables desde entonces (López Pintor,

1982: 158). Por otro lado, tampoco parece haber existido un proceso adulto de aprendizaje con respecto a la confianza social en el nuevo régimen democrático.

GRÁFICO 3
COHORTES Y CONFIANZA INTERPERSONAL EN ESPAÑA, 1980-1994



Fuentes: Para 1980, 1987 y 1994, Banco de Datos del CIS (estudios 1232, 1703 y 2218); para 1990, World Values Survey, 1990-1991.

Ecuación [3]: Modelo de los efectos de período y de cohorte en la confianza interpersonal

$$Y = 30 - 2,55 * X + 1,8 * P_5 + 11,6 * P_6 + 6,6 * P_7$$

$$\text{Probabilidad} = (0,000) (0,274) (0,000) (0,001)$$

$$R^2 = 0,63$$

Ecuación [4]: Modelo de los efectos de período y de cohorte desagregada en la confianza interpersonal

$$Y = 17,25 + 9,7 * X_1 + 8,7 * X_2 + 3,5 * X_3 + 2,7 * X_4 + 1,8 * P_5 + 11,6 * P_6 + 6,6 * P_7$$

$$\text{Probabilidad} = (0,000) (0,000) (0,07) (0,155) (0,274) (0,000) (0,001)$$

$$R^2 = 0,90$$

VARIABLES DEL MODELO: X = Cohorte agregada; X₁ = Cohorte 2 (transición); X₂ = Cohorte 3 (liberalización); X₃ = Cohorte 4 (autarquía); X₄ = Cohorte 5 (guerra civil); P₅ = Período 2 (1987); P₆ = Período 3 (1990); P₇ = Período 4 (1994).

VARIABLES DE REFERENCIA: Cohorte 6 (monarquía) y Período 1 (1980).

La formación de capital social: la política importa

Estos resultados confirman la hipótesis de que la confianza interpersonal es resultado de un largo proceso de acumulación cultural y que tiende a permanecer estable a lo largo de las generaciones²¹. Pese al notable incremento conocido por el número de asociaciones desde finales de los años setenta, no parece que la confianza social haya podido diseminarse en la sociedad española: sus efectos sólo se han hecho notar escasamente, y de manera desigual, entre las distintas generaciones. Es posible que un cierto umbral de asociacionismo sea condición necesaria, pero resulta insuficiente. Para ello, una parte significativa de los ciudadanos debería decidirse a participar en las asociaciones, lo cual requiere a su vez una amplia difusión de la confianza social mediante procesos de aprendizaje y de socialización política. Y no hay signos de cambio en esa dirección entre las cohortes más jóvenes. Incluso aceptando las interpretaciones habituales sobre la reemergencia de la sociedad civil española con anterioridad a la llegada de la democracia (Pérez Díaz, 1993: 13-19; 1995: 29-47), parece claro que las redes de conexión entre sus distintos grupos tampoco han sido capaces de generar el elemento de confianza mutua entre los ciudadanos que es imprescindible para que las asociaciones voluntarias puedan funcionar de manera eficiente y con una mínima visibilidad.

Este planteamiento, sin embargo, no debería interpretarse como otro tipo de determinismo cultural o histórico. Y tampoco cabe calificar esta aproximación como una explicación exógena de la formación de capital social y de la confianza social (Jackman y Miller, 1998: 48 y 57-59). No creemos que sea necesario retroceder varios siglos en la historia de España, como hace Putnam (1993) para Italia, a la hora de dar cuenta de la debilidad del capital social en varias generaciones de españoles. Nuestro intento de explicación está más bien basado en los acontecimientos históricos de las últimas décadas, y tiene una naturaleza fundamentalmente política²². En suma, nuestro argumento es que la política resulta esencial para la formación de la confianza interpersonal y, por tanto, del capital social. Concebido éste más como un síndrome cultural colectivo que como un mero atributo individual, la incidencia de la política en su creación ha tenido lugar a través de las experiencias acumuladas por generaciones de españoles en sus vivencias de acontecimientos políticos colectivos, sus relaciones con asociaciones políticas o de intereses y sus percepciones de los discursos dominantes emitidos por

21. Sobre el concepto de acumulación cultural pueden verse Almond y Verba (1963: 213-221, 279) y Putnam (1993: 152-162).

22. Nos distanciamos así de la explicación sobre el origen del capital social en Italia propuesta por Putnam (1993), ya que, además de sus posibles inadecuaciones históricas (Sabetti, 1996), no tiene en cuenta buena parte de los más recientes acontecimientos políticos (Laitin, 1995: 172-173, y Tarrow, 1996: 393). Véase también Boix y Posner (1996: 20-25, y 2000).

los actores políticos y sociales. De ahí que propongamos la inclusión de estos aspectos, normalmente transmitidos a través de los procesos de socialización política, en cualquier intento explicativo de la formación de la confianza social y, por lo tanto, del capital social.

Las condiciones sociales y políticas en los últimos ciento cincuenta años apenas han favorecido el desarrollo de las asociaciones voluntarias. Como ha señalado Maravall (1995: 259), España compartió con otros países del sur de Europa «una historia caracterizada por la inestabilidad política, por tensiones ideológicas y por prolongados periodos de dictadura [que han dificultado] la construcción de un tejido social favorable a la democracia». La extraordinaria discontinuidad de la vida política en el siglo xx quedó patentizada por la sucesión de la monarquía liberal, una corta dictadura militar, la Segunda República, la guerra civil y el establecimiento del régimen franquista, el más largo, junto con el de Oliveira Salazar en Portugal, de todos los dictatoriales surgidos en Europa tras la primera guerra mundial. La inestabilidad política dificultó el desarrollo de organizaciones sociales autónomas, de tradiciones de cooperación entre las élites sociales y políticas, de relaciones basadas en la confianza mutua entre ciudadanos. Además, esta discontinuidad estuvo agravada por la fragilidad de los partidos políticos y la intensa sucesión de las distintas élites. También el atraso económico contribuyó a la debilidad de las organizaciones sociales, a la deficiente articulación de las demandas de muchos grupos sociales y a la escasa influencia de los líderes sociales modernizadores que se oponían a los de la poderosa oligarquía tradicional. La Restauración monárquica contempló la consolidación de lo que Linz (1981: 367) ha identificado como las características principales de la política de intereses en España: la primacía de la política sobre los intereses, de los *cleavages* partidistas sobre los conflictos de intereses, de los alineamientos políticos sobre los intereses económicos. Esto supuso dificultades notables para la institucionalización de las organizaciones de intereses y la consolidación de las asociaciones voluntarias. Los problemas se agravaron debido a la existencia del fraude electoral sistemático, al extendido funcionamiento del caciquismo y al creciente sentimiento de alienación respecto al sistema político. En los años treinta, la corta experiencia democrática de la Segunda República estuvo dominada por la afiliación masiva a organizaciones sociales y políticas como consecuencia de la intensa movilización, así como por la extrema politización de los intereses y estrategias de estas organizaciones, su alineamiento junto a los partidos en los numerosos conflictos producidos, y la creciente polarización en la articulación de sus demandas. Una vez más, por tanto, el clima político impedía la institucionalización política de los grupos de interés y la difusión de los mecanismos cooperativos más allá de las siempre excluyentes identidades políticas²³. Tras la guerra civil, los primeros quince

23. Para una acertada discusión de los riesgos de la existencia de organizaciones y asociaciones políticas muy movilizadas en el contexto de una sociedad fragmentada, véase Boix y Posner (1996 y 1998).

años de régimen autoritario fueron testigos de la prácticamente total eliminación de la mayoría de las organizaciones tradicionales existentes, la represión de los grupos de oposición y el establecimiento de un rígido marco intervencionista para las organizaciones que fueron capaces de surgir, o de sobrevivir. Durante esta etapa, sólo las organizaciones vinculadas a la Iglesia católica o a la Falange pudieron operar con cierto grado de autonomía. En 1961 había sólo 8.329 asociaciones voluntarias oficialmente registradas en España (Linz, 1971), una cifra que por sí misma es bastante elocuente de la debilidad asociativa.

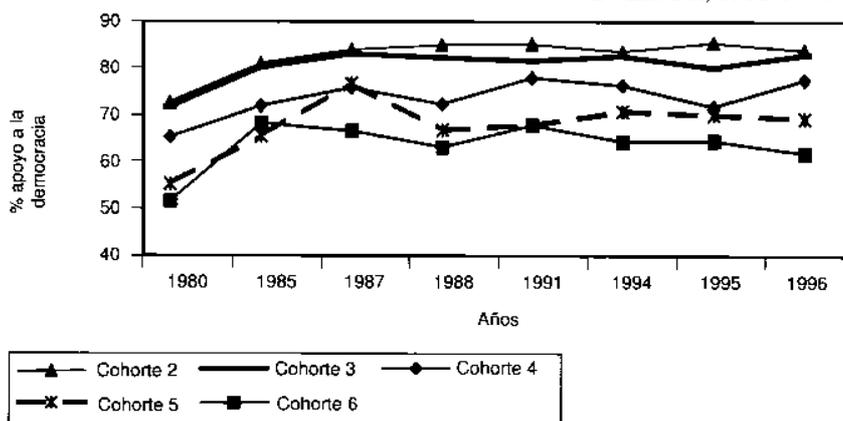
Este trasfondo histórico contribuye a explicar la ausencia de confianza social y de actitudes participativas entre los españoles de mayor edad. Desde los años sesenta en adelante, sin embargo, empezaron a darse cambios significativos que, por su parte, podrían haber impulsado a la creación de capital social entre las generaciones más jóvenes. En 1964, el régimen autoritario introdujo la Ley de Asociaciones, que rompió el virtual duopolio hasta entonces disfrutado por la Iglesia y el partido único. Esto permitió al régimen canalizar un desarrollo limitado de organizaciones sociales *lato sensu*. Diez años más tarde, la transición democrática requirió la creación de partidos y organizaciones políticas, a la vez que el nuevo clima de libertades propició la creación de asociaciones de todo tipo. Pero, como ya hemos observado en el gráfico 3, ambos desarrollos no favorecieron de manera significativa las actitudes de confianza interpersonal entre los españoles más jóvenes ni entre las cohortes mayores. Dos factores podrían explicar este resultado. Primero, el régimen autoritario mantuvo siempre una decidida estrategia contra cualquier tipo de compromiso participativo o político que fuera más allá de las estructuras jerárquicas proporcionadas por el Estado. Como consecuencia, sólo una minoría podía ser movilizadora políticamente en contra o a favor del régimen: la gran mayoría de los españoles se caracterizaba precisamente por su desimplicación, su pasividad y su despolitización (IOP, 1967: 185-227). Y segunda, la transición española se realizó básicamente por acuerdos entre las élites políticas alcanzados a través de negociaciones (Linz, 1993; Gunther, 1992). En determinados momentos de la transición se produjeron movilizaciones relevantes, pero solían tener objetivos a corto plazo y eran suspendidas tan pronto como se alcanzaba un acuerdo entre las élites; no hubo tiempo, pues, para que la participación se institucionalizara. También estos factores políticos deberían, por lo tanto, haber facilitado la transmisión intergeneracional de actitudes conducentes a bajos niveles de confianza social y de implicación política²⁴.

En nuestra opinión, este planteamiento se aleja tanto de los supuestos de la determinación cultural como, sobre todo, de las explicaciones de carácter exógeno en la for-

24. Véanse Álvarez Junco (1994) y Tarrow (1995) para argumentos similares, y Torcal (1997, y de próxima publicación) para evidencia empírica detallada.

mación de capital social. En realidad, su núcleo argumental gira alrededor de las percepciones de los ciudadanos con respecto a los acontecimientos políticos y de sus experiencias anteriores con las instituciones políticas o sociales. Es posible que su pertinencia quede más claramente manifestada si comparamos ahora las pautas intergeneracionales de la confianza social con las de otro conjunto de actitudes políticas básicas. Nos referimos a los niveles de apoyo al actual sistema político. Contrariamente a lo que hemos visto con respecto a la confianza social, los apoyos de cada generación al régimen democrático han variado sustancialmente. También pensamos que la política ha desempeñado un papel importante a este respecto. En principio, el gráfico 4, que recoge las preferencias por el régimen democrático de cada una de las cinco generaciones seleccionadas, vuelve a exhibir, como ocurría con la confianza interpersonal, un claro efecto de cohorte. Esta apreciación visual se confirma con los parámetros de las ecuaciones [5] y [6], que demuestran tanto el efecto cohorte en la legitimidad democrática, como la presencia de un solo efecto de período, al inicio de la serie, en 1980. De forma que, cuanto más joven sea la cohorte, mayor es el apoyo que otorga al régimen democrático. Pero hay dos diferencias destacables con respecto a la confianza social. La primera es que las distancias entre generaciones son algo más abultadas. La segunda es que todas las generaciones, incluidas las menos proclives al régimen democrático, lo apoyan mayoritariamente, por encima del 60 por 100. Esta segunda diferencia, que cabría atribuir al que denominaremos como el *efecto transición*, hace que, para la explicación de los niveles de legitimidad existentes, el cambio producido por la llegada de las generaciones más jóvenes suponga un porcentaje menor.

GRÁFICO 4
COHORTES Y APOYO A LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA, 1980-1996



Fuente: Banco de Datos del CIS (Estudios 1237, 1461, 1695, 1788, 1984, 2107, 2154 y 2218).

Ecuación [5]: Modelo de los efectos de período y de cohorte en la legitimidad

$$Y = 97,25 - 5,46 * X - 11,6 * P_5 - 0,8 * P_6 + 3,2 * P_7 - 0,2 * P_8 + 1,8 * P_9 + 0,8 * P_{10} - 0,6 * P_{11}$$

$$\text{Probabilidad} = (0,000) (0,000) (0,653) (0,079) (0,910) (0,315) (0,653) (0,736)$$

$$R^2 = 0,928$$

Ecuación [6]: Modelo de los efectos de período y cohorte desagregada en la legitimidad

$$Y = 64,87 + 20,2 * X_1 + 18,1 * X_2 + 10,2 * X_3 + 4,0 * X_4 - 11,6 * P_5 - 0,8 * P_6 + 3,2 * P_7 - 0,2 * P_8 + 1,8 * P_9 + 0,8 * P_{10} - 0,6 * P_{11}$$

$$\text{Probabilidad} = (0,000) (0,000) (0,000) (0,004) (0,000) (0,653) (0,079) (0,910) (0,315) (0,653) (0,736)$$

$$R^2 = 0,95$$

Variables del modelo: X = Cohorte agregada; X₁ = Cohorte 2 (transición); X₂ = Cohorte 3 (liberalización); X₃ = Cohorte 4 (autarquía); X₄ = Cohorte 5 (guerra civil); P₅ = Período 1 (1980); P₆ = Período 2 (1985); P₇ = Período 3 (1987); P₈ = Período 4 (1988); P₉ = Período 5 (1991); P₁₀ = Período 6 (1994); P₁₁ = Período 7 (1995).

Variables de referencia: Cohorte 6 (monarquía) y Período 8 (1996).

Con respecto a la primera diferencia, en el gráfico 4 puede apreciarse un cambio gradual entre todas ellas. Como demuestran los coeficientes de la ecuación [6], el incremento de cada generación con respecto a la de referencia (que es la de mayor edad, o la de la *monarquía*) es importante, aunque los cambios más significativos se producen con la cuarta generación, la de la *autarquía* (con un coeficiente del 10,2 por 100), y con la tercera, la de la *liberalización* (con un coeficiente del 18,12 por 100), que manifiesta un aumento medio de ocho puntos, estabilizándose con la de la *transición* (con un coeficiente del 20,2 por 100). Otra manera de interpretar los coeficientes de la ecuación [6] es decir que la media de apoyo a la democracia para todo el período estudiado entre los integrantes de la cuarta generación es de un 74 por 100, y para la tercera de un 82 por 100, lo que supone una diferencia entre ambas de sólo ocho puntos porcentuales. En consecuencia, todas las generaciones han contribuido en medida similar al incremento de los mayoritarios apoyos disfrutados por la democracia española. Y puesto que esa contribución se ha rea-

lizado además de forma similar en cada uno de los distintos períodos de los últimos casi veinte años, cabe deducir que los acontecimientos característicos de cada uno de ellos han tenido un impacto semejante en la explicación del apoyo al régimen democrático.

Pero el efecto de la política es mucho más patente si analizamos la segunda diferencia con respecto a la confianza social que antes apuntábamos, y que atribuíamos al *efecto transición*. Como se ha visto en la ecuación [6], también la generación de mayor edad apoya mayoritariamente al régimen democrático (con un coeficiente para todos los períodos de alrededor del 65 por 100 como media, que es el valor de la constante que toma como variable de referencia a la sexta cohorte, o la *monárquica*). En cambio, la misma generación muestra en la anterior ecuación [4] una confianza social mucho más baja (con un coeficiente aproximado del 17 por 100). Se trata obviamente de una diferencia considerable. Ello confirma que el cambio intergeneracional ha tenido una menor importancia en el incremento de los apoyos al régimen democrático. Frente a la estabilidad de los niveles de confianza interpersonal, el incremento de los de la legitimidad democrática ha provenido fundamentalmente de los cálculos racionales efectuados por muchos españoles durante la transición. Al final del franquismo, la debilidad de las actitudes políticas de la llamada «mayoría ausente», o «indiferente» (López Pintor, 1982: 79; López Pina y Aranguren, 1976: 63), coexistía con sectores minoritarios ideologizados que habían logrado mantener valores democráticos a través de distintos canales. Esa mayoría no manifestaba un apoyo sistemático y explícito a la dictadura, pero tampoco estaba compuesta de demócratas convencidos. La alternativa democrática fue extendiéndose entre todas las generaciones a medida que convergían procesos de reinterpretación de experiencias históricas anteriores, de difusión de los ejemplos provenientes de otros países europeos, de rechazo a los mecanismos todavía vigentes en el régimen autoritario, de aprendizaje de valores democráticos elementales ante la inminencia del cambio político (Maravall, 1995: 261-263). Después, las políticas de reconciliación, el discurso del consenso y el propio curso de la transición terminaron por expandir los apoyos del nuevo régimen (Aguilar, 1996: 209 ss.). Además, pareció llevarse a cabo con una notable rapidez²⁵, lo que refuerza el escaso papel desempeñado por el cambio intergeneracional.

De esta forma, la debilidad de la confianza social y el apoyo mayoritario a la democracia tienen orígenes comunes en el pasado reciente. Pero su evolución ha sido distinta. Mientras que la transición política y casi tres décadas de vida democrática han generado y reforzado el apoyo al régimen democrático, no parecen haber alterado sustancialmente la confianza social. En contra de lo mantenido por algunos autores clásicos (Dahl, 1971: 30-32; Converse, 1969), y más recientemente por algunos teóricos del capital social (Co-

25. Por ejemplo, en las preferencias sobre si las decisiones deben ser adoptadas por «personas elegidas por el pueblo» o «por un hombre destacado que decida por nosotros», las respuestas a la primera opción fueron un 53 por 100 en 1966, un 56 por 100 en enero de 1976 y un 78 por 100 en mayo del mismo año; puede verse López Pintor (1982: 153), y Montero y Torcal (1990: 118).

leman, 1990; Putnam, 1993), el funcionamiento de las instituciones democráticas *per se* no siempre genera actitudes de cooperación y confianza. El caso español parece apuntar así a la autonomía relativa de la legitimidad democrática y de la confianza interpersonal. La tabla 5 confirma además que no hay relación entre ellas. Si la legitimidad democrática ha conocido una notable evolución al alza en todas las generaciones como consecuencia de procesos de aprendizaje político durante la fase final del régimen autoritario y la inicial del sistema democrático, la confianza interpersonal se ha mantenido en niveles similarmente bajos en las distintas generaciones como consecuencia de los procesos de acumulación cultural que transmiten la imagen de experiencias políticas cristalizadas con anterioridad, y que periódicamente se revitalizan a través de sentimientos hacia la política perfilados por el cinismo, el desafecto y la alienación (Montero, Gunther y Torcal, 1998; Maravall, 1995: 290-291). Dicho todavía de otro modo, aunque los bajos niveles de confianza social y los sentimientos unidos a ellos se hayan generado en el pasado, ni la transición ni el propio funcionamiento del régimen democrático han logrado modificarlos (Torcal, de próxima publicación).

TABLA 5.
LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA SEGÚN CONFIANZA
INTERPERSONAL EN ESPAÑA, 1996
(En porcentajes)

<i>Preferencia hacia...</i>	<i>Confianza interpersonal</i>	
	<i>Sí</i>	<i>No</i>
Democracia.....	89	82
Dictadura.....	8	9
Indiferencia.....	3	9
(n).....	(831)	(1.442)

Fuente: Banco de Datos del CJS.

En definitiva, la explicación que proponemos sobre la formación de capital social es endógena y, por ende, política; en ella, la confianza social se constituye en el principal mecanismo de acumulación de pasadas *inversiones* en capital social. Y su expresión no se lleva a cabo exclusivamente mediante las preferencias dictadas por los atributos individuales de los ciudadanos en situaciones relacionales, como suelen señalar los enfoques racionalistas, sino también a través de factores actitudinales que recrean experiencias políticas pasadas y condicionan las utilidades marginales de las preferencias de los individuos. De ahí que no exista, como hemos discutido con anterioridad, un proceso uniforme de la evolución del capital social en las diversas democracias. Y que tampoco, como comprobaremos a continuación, resulten similares sus consecuencias.

La confianza social y algunas de sus consecuencias

Hemos mantenido que los bajos niveles de confianza interpersonal en España son básicamente el resultado de la acumulación de experiencias, contactos y discursos públicos negativos, y que además se han transmitido intergeneracionalmente. En esta última sección queremos analizar hasta qué punto esta falta de confianza social afecta a otros elementos del capital social y a la participación política. En cuanto al primero, examinaremos el impacto de la confianza social en los niveles de afiliación a organizaciones sociales y políticas. La hipótesis clásica sugiere que ambas cuestiones están relacionadas (Almond y Verba, 1963: 212-227; Putnam, 1993: 99-116). ¿Hasta qué punto es cierto en España? Para comprobarlo hemos llevado a cabo un análisis de regresión logística con datos de una encuesta de 1996²⁶, en el que la variable dependiente es la afiliación a cualquier organización social o política²⁷. Las variables independientes son la confianza social y otras cuatro variables sociodemográficas usuales (edad, género, educación y ocupación). El modelo obtenido, que se recoge en la tabla 6, es estadísticamente significativo, pero sólo predice un 65 por 100 (la *pseudo-R*² es 0,03). Por tanto, aunque no explique demasiado la afiliación a estas organizaciones, cabe al menos concluir que la confianza social es estadísticamente significativa (con un coeficiente de 0,199 y una *odds ratio* de 1,22). Parece claro, pues, que la probabilidad de convertirse en miembro de una organización aumenta con la existencia de confianza social (lo que adicionalmente resuelve el «*bootstrap problem*» mencionado en la introducción de este artículo). Esta relación aparece incluso cuando se incorporan en el modelo las variables sociodemográficas habituales. En consecuencia, los resultados de la tabla 6 muestran que actitudes como la falta de confianza interpersonal es relevante para la explicación de la relativamente escasa fuerza de las organizaciones sociales y políticas. La falta de significación estadística de la edad es también destacable: confirma una vez más que el capital social, medido en esta ocasión a través de la afiliación a organizaciones voluntarias, está ausente por igual en todas y cada una de las generaciones de españoles.

26. La encuesta fue llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas en junio de 1996 a una muestra representativa de 2.481 españoles.

27. Originalmente, la variable dependiente era una simple *sum scale* que recogía el número de organizaciones al que cada encuestado pertenecía en 1996. Estas organizaciones consistían en asociaciones de vecinos, de jóvenes, grupos de madres, clubes deportivos, sindicatos, asociaciones de trabajo voluntario, partidos políticos, asociaciones culturales y organizaciones religiosas. Ésta era de hecho una variable *count event* que presentaba una distribución *poisson* (al tratarse de hechos cuya repetición adquiere una creciente dificultad: participar en dos asociaciones tiene mucha más dificultad que participar en sólo una). Sin embargo, decidimos convertirla en una variable dicotómica con valores 1 («miembro de al menos una organización») y 0 («no miembro»). Los resultados de la regresión *poisson* y de la logística fueron muy similares, y en aras de la simplicidad sólo ofrecemos los últimos. Dado que se ha argumentado que la fuerza de la sociedad civil española reside en el número creciente de asociaciones voluntarias de «naturaleza societal» (Pérez Díaz, 1996: 62-63), decidimos repetir el análisis con asociaciones de este tipo. Los resultados fueron muy similares.

TABLA 6.
 CONFIANZA INTERPERSONAL Y AFILIACIÓN A ASOCIACIONES
 VOLUNTARIAS EN ESPAÑA, 1996
 (Regresión logística; la variable dependiente es afiliación
 a asociaciones voluntarias)

<i>Variables independientes</i>	<i>Coefficientes</i>	<i>Odds ratios</i>
Confianza	0,199 *	1,22
Edad.....	-0,001	1,0
Género.....	0,198	1,22
Educación.....	0,273 *	1,31
Ocupación ama de casa	Referencia	
Jubilado	-0,328	0,719
Desempleado	0,102	1,1
Estudiante	0,062	1,06
Trabaja.....	-0,061	0,941
<i>Intercept</i>	-1,350	
Predicción general del modelo	65 por 100	
Pseudo- R^2	0,03	
<i>Log-likelihood</i>	-1.452,2119	

* Significativo en $p < 0,05$.

Fuente: Banco de Datos del CIS.

Si el bajo nivel de confianza interpersonal incide en la escasa presencia de capital social entre los españoles, ¿cuáles son los efectos de ambas variables en la participación política? Una parte de la literatura comparada ha subrayado los efectos del capital social en la participación y la implicación políticas (Moyser y Parry, 1996; Van Deth, 1996; Hooghe y Derks, 1997). El propio Putnam (1995: 68) ha señalado que el descenso del capital social en Estados Unidos ha provocado un alejamiento ciudadano de la política. Los efectos del capital social en los distintos niveles de compromiso político y de participación podrían tener también una incidencia directa en las políticas públicas y en el establecimiento de las prioridades gubernamentales. La movilización diferencial de la población ha llevado a demandas muy particularistas, como Rosenstone y Hasen (1993) han demostrado para el caso norteamericano. Y, según Hardin (1993), quienes manifiestan confianza son los mejor situados en términos económicos y políticos. ¿Ocurre esto también en España?

En nuestra opinión, el capital social, formado en parte a través de la implicación social, tiene un impacto directo en la política, corroborando así lo que Van Deth (1997:

12) ha denominado el *modelo directo* de los efectos del compromiso social en el compromiso político. Trataremos de comprobar esta afirmación midiendo en primer lugar la incidencia del capital social en la participación política. El punto de partida debe una vez más recordar que el nivel de participación es mucho más bajo en España que en otras democracias occidentales. Según comparaciones con indicadores bien conocidos de participación convencional utilizados por Barnes, Kaase y otros (1979), los españoles participan menos en actividades que requieren un mínimo esfuerzo (por ejemplo, «leer la sección política del periódico» o «discutir sobre política»), aunque la diferencia con otros disminuye y llega a desaparecer en cuanto se refieren a otras actividades más costosas (Montero y Torcal, 1990; Maravall, 1984: 117). Estas diferencias apenas han cambiado en los años ochenta y en los primeros noventa (Torcal, 1997), y se ven confirmadas por la proporción de encuestados que manifiestan haber participado en al menos una de las actividades convencionales (además de votar) incluidas en la World Values Survey de 1990 (tabla 7). El caso español presenta los niveles más bajos de participación convencional, unos niveles que además no pueden explicarse en términos de las preferencias por formas alternativas de participación relacionadas con la denominada *new politics* (Kaase y Barnes, 1979; Dalton, 1988). En cualquier caso, España tiene también uno de los niveles más bajos de participación no convencional: junto con los belgas, los españoles se encuentran entre quienes menos participan en cualquiera de los cuatro tipos de actividades no convencionales recogidas en la encuesta ²⁸.

TABLA 7.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL
EN LAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES, 1981 Y 1990 *

Países	Convencional		No convencional	
	1981	1990	1981	1990
Noruega	78	89	—	—
Alemania Occidental....	79	84	85	88
Dinamarca	80	78	78	81
Suecia.....	78	79	—	—
Islandia	76	79	—	93
Holanda	74	76	80	86
Estados Unidos.....	67	73	—	93
Gran Bretaña	64	66	92	91
Francia	62	65	81	85

28. Se preguntó a los encuestados si habían participado en alguna de las siguientes cuatro actividades: «firmar una petición», «colaborar en un *boicot*», «participar en manifestaciones» y «unirse a huelgas».

<i>Países</i>	<i>Convencional</i>		<i>No convencional</i>	
	<i>1981</i>	<i>1990</i>	<i>1981</i>	<i>1990</i>
España	69	52	73	66
Irlanda	52	59	77	83
Italia	51	58	80	87
Bélgica	45	54	64	77

* Los países están ordenados de acuerdo con los promedios decrecientes en ambos años.

Fuentes: World Values Surveys, 1981-1982 y 1990-1991.

¿En qué medida está la falta de participación política relacionada con los bajos niveles de capital social? Para responder a esta pregunta hemos creado índices de participación convencional y no convencional como variables dependientes que contienen la frecuencia de participación en ocho distintas actividades políticas²⁹. Un análisis factorial de estos datos (no presentado) produjo dos factores muy diferentes para ambos tipos de participación, la convencional y la no convencional, con los que se crearon las dos variables dependientes³⁰. El conjunto de variables independientes incluido era similar en ambos modelos: confianza social, afiliación a asociaciones voluntarias, autopostronamiento en la escala izquierda-derecha y variables sociodemográficas estándares (a excepción de la ocupación, que demostró carecer de efectos).

La tabla 8 contiene los resultados de un análisis de regresión múltiple en el que la participación convencional es la variable dependiente. Como puede comprobarse, las dos variables que constituyen el centro de nuestro análisis, esto es, la confianza social y el capital social (medido según la afiliación a asociaciones voluntarias), tienen una relación estadísticamente significativa con el índice de participación convencional: cuanto mayor es la presencia de capital social y de confianza social, mayor es la probabilidad de que se haga uso de alguno de los mecanismos de participación convencional. Esta relación se mantiene incluso cuando controlamos el efecto de otras variables como la educación, el género y la edad. De la comparación de los coeficientes de regresión estan-

29. Los datos proceden de la misma encuesta de 1996 del CIS antes citada. Las actividades eran las de seguir las noticias políticas; hablar sobre política; tratar de convencer a otros; trabajar para solucionar un problema que afecta a uno mismo o a la comunidad, pueblo o ciudad; y trabajar para un partido o candidato político.

30. Hemos realizado un análisis factorial con rotación varimax que ha producido dos factores que explican el 58 y el 26 por 100 de la varianza, respectivamente. El primer factor se formó a partir de las actividades participativas convencionales ya señaladas. El segundo factor incluye las actividades de participación no convencionales de asistir a mítines políticos, bloquear el tráfico y ocupar edificios, fábricas u otros espacios públicos. Ambas variables dependientes, la participación convencional y no convencional, se crearon con los *factor scores* respectivos que resultaron de los dos análisis de componentes principales, basados a su vez en los resultados previos del análisis factorial.

darizados se deduce que el mejor predictor es la afiliación a organizaciones voluntarias. De entre las variables sociodemográficas incluidas en el modelo, hay que destacar la relación con la educación (0,202) y el género (0,145). Ambos coeficientes ponen de manifiesto que los ciudadanos poco educados y las mujeres son los menos propensos a involucrarse en formas de participación convencional, confirmando así que la distinta estructura de oportunidades para determinados grupos es un importante factor diferenciador en la política española. En resumen, si la participación política puede depender de un amplio abanico de actitudes y factores sociodemográficos, entre ellos está desde luego el nivel de capital social. Es cierto que el R^2 del modelo alcanza sólo un 0,148, lo que resulta bastante bajo. Pero si incluimos en el modelo otras variables actitudinales relacionadas con el capital social, como el interés en la política, el modelo mejora hasta un 0,31 sin que se modifiquen las relaciones presentadas en la tabla 8. El capital social, por tanto, tiene una influencia directa en la participación política convencional.

TABLA 8.

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA CONVENCIONAL EN ESPAÑA, 1996

(OLS; la variable dependiente es la participación política convencional)

<i>Variables independientes</i>	<i>Coefficientes</i>	<i>Betas</i>
Confianza	0,163 *	0,08
Afiliación a asociaciones voluntarias (capital social)	0,487 *	0,238
Ideología.....	0,002 **	0,048
Edad.....	0,001 **	0,057
Género.....	0,289 *	0,145
Educación	0,152 *	0,202
<i>Intercept</i>	-0,766 *	—
R^2	0,148	—

* Significativo en $p < 0,01$.** Significativo en $p < 0,05$.

Fuente: Banco de Datos del CIS.

Cabría pensar que la debilidad del capital social, en contra de lo que se ha observado con respecto a los mecanismos convencionales, refuerza la predisposición a la participación no convencional. La literatura comparada ha mostrado que el descenso en la participación convencional de las últimas décadas en las democracias avanzadas ha estado ligado a la búsqueda de formas alternativas de participación (Kaase y Barnes, 1979: 532-533; Inglehart, 1990: 369-370). ¿Ha sido también esto así en España? Los resultados presentados en la tabla 9, en la que la participación política no convencional es ahora la variable dependiente, rechazan esta hipótesis. Además, los signos de los

coeficientes de los indicadores de capital social y de confianza social son los mismos que los observados para la participación convencional; es decir, cuanto mayores son los niveles de confianza social y de capital social, mayor es el nivel de participación no convencional. El modelo presentado en la tabla 9 resulta aún mejor, ya que la R^2 es en este caso 0,206 (y 0,26 cuando se incluye el interés en la política). La afiliación a asociaciones voluntarias es el mejor predictor de la variable dependiente después de la edad, la ideología y la educación. La confianza social es estadísticamente significativa. En nuestra opinión, estos datos son fundamentales para la explicación de la escasa propensión de los españoles a participar en política, independientemente de los costes atribuidos a ello, la diferente estructura de oportunidades para distintos sectores sociales, los niveles de educación y la intensidad de la polarización ideológica.

TABLA 9.
CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA NO CONVENCIONAL EN ESPAÑA, 1996
(OLS; la variable dependiente es participación política no convencional)

<i>Variables independientes</i>	<i>Coefficientes</i>	<i>Betas</i>
Confianza	0,08 **	0,039
Afiliación a asociaciones voluntarias (capital social)	0,224 *	0,108
Ideología.....	0,09 *	-0,198
Edad.....	0,095 *	-0,272
Género.....	0,132 *	0,065
Educación.....	0,08 *	0,115
<i>Intercept</i>	0,689 *	—
R^2	0,206	—

* Significativo en $p < 0,01$.

** Significativo en $p < 0,05$.

Fuente: Banco de Datos del CIS.

Consideraciones finales

Este artículo ha examinado algunas pautas distintivas de la formación y evolución de la confianza social que contribuyen a explicar la baja presencia del capital social en la nueva democracia española. A pesar del aumento de capital social tras el cambio democrático, España constituye un ejemplo de equilibrio de baja intensidad. Hemos mantenido que ello se debe a los bajos niveles de confianza interpersonal que se dan entre los españoles, unos niveles que no han variado entre diferentes generaciones. Esta continuidad actitudinal se encuentra relacionada con un cierto legado cultural transmitido de generación en generación, y que ha resistido a los grandes cambios econó-

micos, sociales y políticos de las últimas décadas. Hemos apuntado también que esta transmisión podría explicarse por los acontecimientos políticos que la mayoría de los españoles ha experimentado y/o recibido de sus mayores a lo largo de su proceso de socialización. La falta de confianza ha contribuido a la baja presencia del capital social, y ambos factores a su vez tienen un impacto específico en la política democrática. Dicho en otros términos, la política desempeña un papel relevante en la formación de capital social, bien que sea a través del filtro de la socialización política. En España, la participación política (tanto la convencional como la no convencional) es muy baja y claramente no igualitaria (Torcal, de próxima publicación). Mientras que éste podría ser el tema de otro trabajo, terminaremos este artículo afirmando que la debilidad del capital social es un factor importante aunque sólo sea por su contribución a los bajos niveles de participación y a la desigualdad política asociada a los mismos. El modelo causal que cabría defender con la evidencia empírica presentada sostiene, por tanto, que la acumulación y transmisión de experiencias políticas con organizaciones e instituciones contribuye a la ausencia de confianza social, una transmisión que apenas varía como consecuencia de otras experiencias políticas vividas durante la edad adulta. Estos bajos niveles de confianza social generan una baja presencia de capital social. Y finalmente los bajos niveles de capital social dificultan la implicación y la participación políticas. El cambio de régimen, es decir, las nuevas instituciones y organizaciones, puede elevar los niveles preexistentes de confianza social y de capital social a través de ciertos mecanismos incentivadores, pero no más allá de un cierto nivel de equilibrio de baja intensidad.

Este diagnóstico se aplica también, *servata distantia*, a los jóvenes españoles. Las interpretaciones poco informadas suelen mantener que en la actualidad los jóvenes estarían protagonizando una revitalización de la vida asociativa a través de su mayor presencia en casi todo tipo de organizaciones, particularmente en las relacionadas con actividades deportivas y de solidaridad, así como con temas de derechos humanos y ecológicos. Se habría confirmado, asimismo, un incremento en la aceptación de los nuevos movimientos sociales, y se han subrayado igualmente los sentimientos cada vez más extendidos de solidaridad, acompañados del incremento de los niveles de trabajo voluntario en lo que ya sería una nutrida red de organizaciones no gubernamentales (Casado, 1992; Mota, 1999). Los datos existentes, sin embargo, desmienten esas percepciones. La tasa de asociatividad entre los jóvenes continúa en niveles tan bajos como a principios de los años ochenta; en realidad, es la más baja de los países europeos, junto con la de Grecia. En estos momentos, siete de cada diez jóvenes no pertenecen a ninguna asociación, y los niveles relativos de afiliación a las ecologistas o de derechos humanos, por ejemplo, siguen siendo similarmente bajos (González Blasco, 1999: 243). Las implicaciones afectivas con los nuevos movimientos sociales han ido perdiendo intensidad hasta quedar reducidas a una mera aceptación (Orizo, 1996: 120-123, y 1999: 71-74). Y sólo el 5 por 100 de los jóvenes trabaja como voluntario, un 2 por 100 no lo hace,

pero colabora económicamente, y un 58 por 100 ni siquiera se lo ha planteado (González Blasco, 1999: 245). Estas pautas refuerzan los problemas cotidianos de muchos movimientos sociales, la irregularidad de sus actividades, su relativo aislamiento y la limitada respuesta a sus llamamientos. Para los movimientos sociales se trata, como ha observado Álvarez Junco (1994: 439), de una situación en parte esquizofrénica: son incapaces de ganarse un apoyo social sostenido en medio del débil tejido asociativo y de la generalizada desconfianza interpersonal que caracterizan a la sociedad española. Pero ocasionalmente pueden salir de períodos de apatía y aprovecharse de las circunstancias que favorecen su conversión en vehículos de protesta contra los gobiernos, a los que se tiene por responsables de todos los problemas que aquejan a la sociedad y a los que también se utiliza como excusa para la pasividad de muchos grupos sociales. Es claro que la influencia de las asociaciones políticas y sociales podría ir más allá de la contribución de sus miembros a la protesta contra las decisiones de los gobiernos; pero este tipo de influencia no constituye capital social.

Además de un estudio sobre la creación de la confianza social y su impacto en el capital social en España, este artículo ha pretendido discutir la formación del capital social en una nueva democracia. Muchos autores han tratado de entender este problema desde una perspectiva de elección racional³¹. De hecho, buena parte de la literatura sobre la cuestión consiste en la búsqueda de una solución al equilibrio no-cooperativo inherente al problema de la acción colectiva que también se encuentra en la formación de capital social. Se han utilizado así, por ejemplo, los argumentos de los incentivos selectivos, la apropiación de bienes privados, el superjuego del dilema del prisionero, el equilibrio institucional inducido y otros similares. Nosotros creemos que una explicación quizás parcial pero desde luego relevante de la existencia de *free-riding* en la formación de capital social puede encontrarse en la debilidad de la confianza interpersonal. En este sentido, la confianza social no es tan sólo una acción que resulte de cálculos racionales de naturaleza *tit-for-tat*; puede ser también una actitud cultural que resulta de la acumulación de experiencias transmitidas a través de procesos acumulados de socialización política. Esta concepción de la confianza social no sólo ayuda a explicar los bajos niveles de aumento de capital social en las nuevas democracias después de sus experiencias autoritarias, sino que también contribuye a resolver el *bootstrap problem*: su presencia puede alterar la utilidad marginal de la preferencia cooperativa entre actores, solucionando el equilibrio no cooperativo del dilema del prisionero inherente en la acción colectiva.

(Traducción de Beatriz Acha)

31. Por ejemplo, Granovetter (1973 y 1985), Coleman (1990), Foley y Edwards (1997), Kolankiewicz (1996), Diani (1997), Hofferth, Boisjoly y Ducan (1999), y Jackman y Miller (1998).

Referencias

- Aguilar, Paloma. 1996. *Memoria y olvido de la guerra civil española*. Madrid: Alianza.
- Almond, Gabriel A., y Sidney Verba. 1963. *The civic culture. Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Álvarez Junco, José. 1994. «Movimientos sociales en España: del modelo tradicional a la modernidad postfranquista», en *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*, eds. Enrique Laraña y Joseph Gusfield. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Astudillo, Javier. 1998. *Los recursos del socialismo: las cambiantes relaciones entre el PSOE y la UGT (1982-1993)*. Madrid: Tesis doctoral, Instituto Juan March.
- Axelrod, Robert. 1997. *The complexity of cooperation*. Princeton: Princeton University Press.
- Barnes, Samuel H., Max Kaase et al. 1979. *Political action. Mass participation in five western democracies*. Beverly Hills: Sage.
- Bartolini, Stefano. 1983. «The membership of mass parties: the social-democratic experience, 1889-1978», en *Western european party systems: continuity and change*, eds. Hans Daalder y Peter Mair. Londres: Sage.
- Baumgartner, Frank R., y Jack L. Walker. 1988. «Survey research and membership in voluntary associations», *American Journal of Political Science*, 32: 908-928.
- Boix, Carles, y Daniel N. Posner. 1996. «Making social capital work: a review of Robert Putnam's *Making democracy work: civic traditions in modern Italy*». Cambridge: The Center for International Affairs, Harvard University, Paper 96-4.
- 1998. «Social capital: explaining its origins and effects on government performance», *British Journal of Political Science*, 28: 686-693.
- 2000. «Capital social y democracia», en esta *Revista*.
- Bourdieu, Paul. 1985. «The forms of capital», en *Handbook of theory and research for the sociology of education*, ed. J. G. Richardson, Nueva York: Greenwood.
- Casado, Demetrio, ed. 1992. *Organizaciones voluntarias en España*. Barcelona: Editorial Haccr.
- Coleman, James S. 1988. «Social capital in the creation of human capital», *American Journal of Sociology*, 94: 95-119.
- 1990. *Foundations of social theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Converse, Philip E. 1969. «Of time and partisan stability», *Comparative Political Studies*, 2: 139-171.
- Curtis, James E., Edward G. Grabb y Douglas E. Baer. 1992. «Voluntary association membership in fifteen countries», *American Sociological Review*, 57: 139-152.
- Dahl, Robert A. 1971. *Poliarchy. Participation and opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dalton, Russell J. 1988. *Citizen politics in western democracies. Public opinion and*

- political parties in the United States, Great Britain, West Germany and France*. Chatham: Chatham House Publishers.
- Dekker, Paul, y Andries van den Broeck. 1998. «Civil society in comparative perspective: involvement in voluntary associations in North America and western Europe», *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 9: 11-38.
- Diani, Mario. 1997. «Social movements and social capital: a network perspective on movement outcomes», *Mobilization: An International Journal*, 2: 129-147.
- Ebbinghaus, Bernhard, and Jelle Visser. 1999. «When labour institutions matter: union growth and decline in Western Europe, 1950-90», *European Sociological Review*, 15: 135-58.
- Fienberg, Stephen E., y William M. Mason. 1985. «Specification and implementation of age, period and cohort effects», en *Cohort analysis in social research. Beyond the identification problem*, eds. William M. Mason y Stephen E. Fienberg, Nueva York: Springer-Verlag.
- Foley, Michael, y Bob Edwards. 1997. «Escape from politics? Social theory and the social capital debate», *American Behavioural Scientist*, 40: 550-561.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Nueva York: Free Press.
- Gangas, Pilar. 1995. *El desarrollo organizativo de los partidos políticos españoles de implantación nacional*. Madrid: Tesis doctoral, Instituto Juan March.
- Granovetter, Mark S. 1973. «The strength of weak ties», *American Journal of Sociology*, 78: 1360-1380.
- 1985. «Economic action social structure and embeddedness», *American Journal of Sociology*, 91: 481-510.
- González Blasco, Pedro. 1999. «Relaciones sociales y espacios vivenciales», en *Jóvenes españoles 99*. Madrid: Fundación Santa María.
- Gundelach, Peter. 1995. «Grass-roots activities», en *The impact of values*, eds. Jan W. van Deth y Elinor Scarbrough. Oxford: Oxford University Press.
- Gunther, Richard. 1992. «Spain: the very model of the modern elite settlement», en *Elites and democratic consolidation in Latin America and Southern Europe*, eds. John Higley y R. Gunther. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gunther, Richard, y José Ramón Montero. De próxima publicación «Political intermediation, electoral volatility, and voter depolitization in Spain», en Paul A. Beck y John Curtice, eds., *Filtered choices: intermediaries and the vote in contemporary democracies*.
- Hall, Peter A. 1999. «Social capital in Britain», *British Journal of Political Science*, 29: 417-461.
- Hardin, Russell. 1971. «Collective action as an agreeable N-prisoner's dilemma», *Behavioral Science*, 16: 472-481.

- 1993. «The street level epistemology of trust», *Politics and Society*, 21: 505-529.
- Herreros, Francisco. 2000. *Social capital and civic republicanism*. Madrid: Centro Avanzado en Ciencias Sociales, Instituto Juan March, Estudio/Working Paper, 149.
- Hofferth, Sandra L., Johanne Boisjoly y Greg J. Duncan. 1999. «The development of social capital», *Rationality and Society*, 11: 79-110.
- Hooghe, Mark, y Anton Derks. 1997. «Voluntary associations and the creation of social capital». Ponencia presentada en las ECPR Joint Sessions, Berna.
- Inglehart, Ronald. 1990. *Culture shift in advanced industrial society*. Princeton: Princeton University Press.
- 1997. *Modernization and postmodernization: cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton: Princeton University Press.
- IOP [Instituto de Opinión Pública]. 1967. «Cuestiones de actualidad política», *Revista Española de Opinión Pública*, 9: 185-227.
- Jackman, Robert W., y Ross A. Miller. 1998. «Social capital and politics», *Annual Review of Political Science*, 1: 47-73.
- Jordana, Jacint. 1996. «Reconsidering union membership in Spain, 1977-1994: halting decline in a context of democratic consolidation», *Industrial Relations Journal*, 27: 211-224.
- 1999. «Collective action theory and the analysis of social capital», en *Social capital and european democracy*, eds. Jan W. van Deth, Marco Maraffi, Ken Newton y Paul F. Whiteley. Londres: Routledge.
- Kaase, Max, y Samuel H. Barnes. 1979. «In conclusion. The future of political protest in western democracies», en *Political action. Mass participation in five western democracies*, eds. S. H. Barnes, M. Kaase et al., Beverly Hills: Sage.
- Katz, Richard S., Peter Mair et al. 1992. «The membership of political parties in european democracies, 1960-1990», *European Journal of Political Research*, 22: 329-345.
- Kolankiewicz, George. 1996. «Social capital and social change», *The British Journal of Sociology*, 47: 427-441.
- Krosnick Jon A., y Duane F. Alwin. 1989. «Aging and susceptibility to attitude change», *Journal of Personality and Social Psychology*, 57: 416-425.
- Laitin, David P. 1995. «The civic culture at 30», *American Political Science Review*, 89: 173-186.
- Levi, Margaret. 1996a. *A state of trust*, EUJ Working Paper, 96/23. San Domenico: European University Institute.
- 1996b. «Social and unsocial capital: a review essay of Robert Putnam's *Making democracy work*», *Politics and Society*, 24: 45-55.
- Linz, Juan J. 1971. «La realidad asociativa de los españoles», en *Sociología española de los años 70*. Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros.
- 1981. «A century of politics and interests in Spain», en *Organizing interests in western*

- Europe: pluralism, corporativism and the transformation of politics*, ed. Suzanne D. Berger. Cambridge: Cambridge University Press.
- 1993. «Innovative leadership in the transition to democracy and a new democracy: the case of Spain», en *Innovative leaders in international politics*, ed. Gabriel Sheffer. Albany: State University of New York Press.
- López Pina, Antonio, y Eduardo López Aranguren. 1976. *La cultura política en la España de Franco*. Madrid: Taurus.
- López Pintor, Rafael. 1982. *La opinión pública española del franquismo a la democracia*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Maloney, William A. 1999. «Contracting out the participation function: social capital and chequebook participation», en *Social capital and european democracy*, eds. Jan W. van Deth, Marco Maraffi, Ken Newton y Paul F. Whiteley. Londres: Routledge.
- Mannheim, Karl. 1952 [1928]. «The problem of generations», en *Essays on the sociology of knowledge*, ed. Paul Kecskemeti. Nueva York: Oxford University Press.
- Mason, Karen O., William M. Mason, H. H. Winsborough y Kenneth Poole. 1973. «Some methodological issues in cohort analysis of archival data», *American Sociological Review*, 38: 242-258.
- Maravall, José María. 1984. *La política de la transición*. Madrid: Taurus, 2.^a ed.
- 1995. *Los resultados de la democracia*. Madrid: Alianza.
- Méndez-Lago, Mónica. 1998. *Organising for victory... and defeat? The organisational strategy of the Spanish Workers' Socialist Party (1975-1996)*. Florencia: Tesis doctoral, Instituto Universitario Europeo.
- Merkel, Peter H. 1988. «Comparing legitimacy and values among advanced democratic countries», en *Comparing pluralist democracies*, ed. Mattei Dogan. Boulder: Westview Press.
- Montero, José Ramón. 1981. «Partidos y participación política: algunas notas sobre la afiliación política en la etapa inicial de la transición española», *Revista de Estudios Políticos*, 23: 33-72.
- Montero, José Ramón, y Mariano Torcal. 1990. «Voters and citizens in a new democracy: some trend data on political attitudes in Spain», *International Journal of Public Opinion Research*, 2: 116-140.
- Montero, José Ramón, Richard Gunther y Mariano Torcal. 1998. «Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, descontento y desafección», *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 83: 9-49.
- Morales, Laura. 1998a. «Cambios en las pautas de activismo político en los países occidentales: una aproximación al caso español». Ponencia presentada en el VI Congreso Español de Sociología, La Coruña.
- 1998b. «La evolución del papel de los militantes en los partidos políticos. Un análisis de AP-PP, PCE-IU y PSOE». Manuscrito.

- Morlino, Leonardo. 1998. *Democracy between consolidation and crisis. Parties, groups, and citizens in southern Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Mota, Fabiola. 1999. «La realidad asociativa en España», en *¿Existe sociedad civil en España? Responsabilidades colectivas y valores públicos*, ed. Joan Subirats. Madrid: Fundación Encuentro.
- Moyscr, George, y Geraint Parry. 1996. «Voluntary associations and democratic participation in Britain». Ponencia presentada en las ECPR Joint Sessions, Oslo.
- Newton, Kenneth. 1999a. «Social capital and democracy in modern Europe», en *Social capital and european democracy*, eds. Jan W. van Deth, Marco Maraffi, Ken Newton y Paul F. Whiteley. Londres: Routledge.
- 1999b. «Social and political trust in established democracies», en *Critical citizens. Global support for democratic governance*, ed. Pippa Norris. Oxford: Oxford University Press.
- Nie, Norman, Sidney Verba y Jae-On Kim. 1974. «Participation and the political cycle», *Comparative Politics*, 6: 319-340.
- Núñez, Clara Eugenia. 1992. *La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España contemporánea*. Madrid: Alianza.
- Olson, Mancur. 1965. *The logic of collective action. Public goods and the theory of groups*. Cambridge: Harvard University Press.
- Orizo, Francisco A. 1996. *Sistemas de valores en la España de los 90*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- 1999. «Jóvenes: sociedad e instituciones», en *Jóvenes españoles 99*. Madrid: Fundación Santa María.
- Pérez Díaz, Víctor. 1993. *La primacía de la sociedad civil. El proceso de formación de la España democrática*. Madrid: Alianza.
- 1996. *España puesta a prueba, 1976-1996*. Madrid: Alianza.
- Portes, Alejandro. 1998. «Social capital: its origins and applications in modern sociology», *Annual Review of Sociology*, 24: 1-24.
- Price, R. 1989. «Trade union membership», en *International labour statistics. A handbook, guide, and recent trends*, ed. R. Bean. Londres: Routledge.
- Prieto-Lacaci, Rafael. 1994. «Asociaciones voluntarias», en *Tendencias sociales en España (1960-1990)*, ed. Salustiano del Campo, vol. I. Bilbao: Fundación BBV, 2.ª ed.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making democracy work. Civic traditions in modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- 1995. «Bowling alone: America's declining social capital», *Journal of Democracy*, 6: 65-78.
- Rintala, Marvin. 1979. *The constitution of silence: essays in generational themes*. Westport: Greenwood.

- Rosenstone, Steven J., y John Mark Hansen. 1993. *Mobilization, participation, and democracy in America*. Nueva York: MacMillan.
- Ryder, Norman B. 1985. «The cohort as a concept in the study of social change», en *Cohort analysis in social research. Beyond the identification problem*, eds. William M. Mason y Stephen E. Fienberg. Nueva York: Springer-Verlag.
- Sabeti, Filippo. 1996. «Path dependency and civic culture: some lessons from Italy about interpreting social experiments». *Politics and Society*, 24: 19-44.
- Tarrow, Sidney. 1995. «Mass mobilization and regime change: pacts, reform, and popular power in Italy (1918-1922) and Spain (1975-1978)», en *The politics of democratic consolidation. Southern Europe in comparative perspective*, eds. Richard P. Gunther, P. Nikiforos Diamandouros y Hans-Jürgen Puhle. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- 1996. «Making social science work across space and time. A critical reflection on Robert Putnam's *Making democracy work*», *American Political Science Review*, 90: 389-397.
- Torcal, Mariano. 1995. *Actitudes políticas y participación política en España: pautas de cambio y continuidad*. Madrid: Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.
- 1997. «Southern europeans between legitimacy and disaffection: attitudinal change and its consequences in new democracies». Ponencia presentada en el Congreso Internacional de la Latin American Studies Association, Guadalajara (México).
- De próxima publicación. *La desafección democrática en las nuevas democracias: España en perspectiva comparada*.
- Uslaner, Eric M. 1999. «Morality plays: social capital and moral behavior in Anglo-American democracies», en *Social capital and european democracy*, eds. Jan W. van Deth, Marco Maraffi, Ken Newton y Paul F. Whiteley. Londres: Routledge.
- Van Deth, Jan W. 1996. «Social and political involvement: an overview and reassessment of empirical findings». Ponencia presentada en los ECPR Joint Sessions, Oslo.
- 1997. «Introduction. Social involvement and democratic politics», en *Private groups and public life. Social participation, voluntary associations and political involvement in representative democracies*, eds. Jan W. Van Deth. Londres: Routledge.
- Van Deth, Jan W., y Frauke Krcuter. 1998. «Membership in voluntary associations», en *Comparative politics. The problem of equivalence*, eds. J. W. van Deth. Londres: Routledge.
- Van der Meer, Marc. 1995. «Trade union membership in Spain». Manuscrito.
- Whiteley, Paul F. 1997. «Political capital formation among british party members», en *Private groups and public life. Social participation, voluntary associations and political involvement in representative democracies*, cd. Jan W. Van Deth. Londres: Routledge.
- 1999. «The origins of social capital», en *Social capital and european democracy*, eds.

Jan W. van Deth, Marco Maraffi, Ken Newton y Paul F. Whiteley. Londres:
Routledge.

MARIANO TORCAL

E-mail: Torcal@uam.es

Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Es Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y candidato a Doctor por la Ohio State University. Ha sido profesor visitante en la University of Michigan y en la Universitat Pompeu Fabra, y *Visiting Fellow* en el Kellogg Institute de la Notre Dame University. Ha publicado numerosos trabajos sobre cultura política y comportamiento electoral, y ha recibido el segundo premio Gregory M. Luebbert al mejor artículo publicado en inglés en 1999 por la American Political Science Association. En la actualidad está finalizando un libro sobre *La desafección democrática en las nuevas democracias*.

JOSÉ RAMÓN MONTERO

E-mail: Montero@ceacs.march.es

Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Ciencia Política en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March. Es Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y ha enseñado en las de Granada, Santiago, Zaragoza, Cádiz y Complutense de Madrid. Ha sido *Visiting Fellow* en Harvard University, University of California en Berkeley y Ohio State University. Ha sido secretario y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, subdirector general del Centro de Investigaciones Sociológicas y gestor del Programa de Estudios Sociales y Económicos, de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Es miembro del *Standing Committee for the Social Sciences*, de la *European Science Foundation*. Ha publicado numerosos trabajos sobre cultura política, comportamiento electoral y partidos.